

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
64/2009.
SERVIDOR PÚBLICO: ***.**

PONENTE:
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA:
GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ELABORÓ:
MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.

Vo. Bo.
Sr. Ministro.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente **al día quince de febrero de dos mil dieciséis.**

Cotejó.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia. Por oficio número DGDHAS/0940/2009, suscrito por el Director General de Desarrollo Humano y Acción Social, de este Alto Tribunal recibido el uno de septiembre de dos mil nueve en la Contraloría de este Máximo Tribunal, se hizo del conocimiento de esa Unidad la existencia de conductas que pudieran constituir una infracción administrativa atribuida a un servidor público; dicho oficio es del tenor siguiente:

“*****”¹

¹ Fojas 1 a 4 del procedimiento de responsabilidad administrativa.

SEGUNDO. Inicio del procedimiento. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil nueve, el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal, tuvo por recibido el oficio arriba transcrito y determinó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a *****, registrando el asunto como P.R.A. 64/2009; asimismo, en dicho proveído requirió a ese servidor público para que formulara un informe sobre las conductas imputadas y ofreciera las pruebas que en su defensa tuviera; así como se decretó la suspensión temporal en el cargo que desempeñaba.

TERCERO. Informe rendido por el servidor público. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil nueve, se tuvo por rendido en tiempo y forma el informe de *****; y por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas ahí relacionadas. En ese acuerdo se admitió la documental consistente en la copia certificada del dictamen pericial en psicología elaborado por *****, perito adscrita a la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, para ello, se ordenó girar oficio al Titular de esa Procuraduría para que remitiera copia certificada del dictamen, el cual se encuentra agregado en la averiguación previa *****, radicada en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Unidad Investigadora número FDS-4-04, primer turno, de la Fiscalía de Investigación para Delitos *****.

CUARTO. Acuerdos relativos a diversos medios de prueba ofrecidos por el servidor público. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil nueve, se tuvo por recibido el oficio de veinticuatro de septiembre del citado año, por el cual la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para ***** de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, remitió copias certificadas del dictamen pericial en psicología emitido por la perito

*****, en la averiguación previa *****. Asimismo se tuvo por ofrecida y admitida la prueba pericial en psicología a cargo de *****; se admitieron las testimoniales ofrecidas por el servidor público; y se ordenó dar vista a ***** (madre de la menor involucrada en la denuncia) para que, de considerarlo procedente, adicionara el cuestionario de la prueba pericial mencionada y para que pudiera asistir al desahogo de las testimoniales.

Mediante acta levantada el catorce de octubre de dos mil nueve, ante las Oficinas de la Contraloría de la Suprema Corte, se hizo constar que compareció ***** a aceptar el cargo que le fue conferido como perito del servidor público, quien se identificó con cédula profesional que la acredita como licenciada en psicología, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como manifestó bajo protesta de decir verdad que tenía la capacidad para emitir dictamen sobre el asunto en particular.

Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil nueve se tuvo por ampliado el cuestionario para el desahogo de la pericial en psicología, ofrecido por *****; se determinó que el “estudio” elaborado por la ***** (*****), no podía ser considerado una pericial; y se tuvo como designada a la perito *****; nombrada como tal por los padres de la menor.

Mediante acta levantada el treinta de octubre de dos mil nueve, ante las Oficinas de la Contraloría de este Alto Tribunal, se hizo constar que compareció *****; quien se ostentó como especialista en *****; se identificó con credencial de elector y manifestó que no contaba con documento con el que acreditara estar autorizada para ejercer la profesión de psicóloga, pero que sí contaba con documentos

que acreditaran que estaba en proceso de titulación, exhibiendo diversas constancias como especialista en *****.

QUINTO. Desahogo de la prueba testimonial. Mediante actas levantadas el doce de noviembre de dos mil nueve, en las instalaciones de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desahogaron las testimoniales ofrecidas por el servidor público, a cargo de *****, ***** y *****.

SEXTO. Desistimiento de la prueba pericial; recepción de documentales. Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil nueve, se tuvo por desistido al servidor público de la prueba pericial en psicología.

Por auto de ocho de diciembre de dos mil nueve, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de Desarrollo Humano y Acción Social de este Alto Tribunal, por medio del cual remitió copia certificada del expediente de la alumna *****, y el correspondiente al servidor público *****. Mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil diez, se tuvo por recibido el oficio del Director General de Personal, en el cual remitió copia certificada del expediente personal del servidor público; y por diverso proveído de quince abril siguiente, se tuvo por recibido el oficio del Director General de Desarrollo Humano y Acción Social, por el cual remitió diversa documentación relativa a la normatividad aplicable al Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional”.

SÉPTIMO. Solicitud dirigida a la Procuraduría General de la República. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diez, se ordenó girar oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las

Mujeres y Trata de Personas, para que en auxilio de las funciones de la Contraloría, remitiera copia certificada de la averiguación previa *****, iniciada con motivo de la denuncia presentada por ***** en contra de *****.

Posteriormente, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil diez, se tuvo por recibido el oficio FEVIMTRA-C/DAP/MESA-XIV/211/2010, de treinta y uno de agosto de dos mil diez, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en el que informó que no era procedente remitir copia certificada de la averiguación previa referida; por ello, se ordenó girar oficio al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, para que remitiera copia certificada de las constancias referidas; lo que fue reiterado por diverso acuerdo de veinticinco de octubre del citado año.

OCTAVO. Constancias de la causa penal. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil diez, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de Desarrollo Humano y Acción Social, con el que remitió copia simple de diversas comunicaciones relacionadas con la causa penal *****, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Asimismo, en dicho proveído se ordenó girar oficio al órgano jurisdiccional referido, para que en colaboración y auxilio de las labores de investigación de la Contraloría, proporcionara copia certificada de la causa penal antes indicada.

Y por acuerdo de ocho de marzo de dos mil once, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de Recursos Humanos, en el cual envió diversas constancias de la causa penal indicada, destacando entre ellas, el auto de formal prisión de treinta de septiembre de dos mil diez, y acuerdos dictados por el Juez de Distrito encargado del expediente.

NOVENO. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil once, se determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que se declaró cerrada la instrucción para la emisión del dictamen respectivo.

DÉCIMO. Primer dictamen emitido por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El uno de junio de dos mil once, el citado emitió dictamen; del que se transcribe lo siguiente:

“*****”²

DÉCIMO PRIMERO. Reposición del procedimiento. Con base en el dictamen referido, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal dictó resolución el veintinueve de marzo de dos mil doce, en la que determinó que la investigación practicada no fue exhaustiva, puesto que no fue adecuada para la obtención de pruebas que esclarecieran la verdad de las conductas, por ello, ordenó la reposición del procedimiento; asimismo, destacó la existencia de la causa penal *****², del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, para subrayar que en ese proceso se desahogaron diversas pruebas que podían servir en el expediente que nos ocupa, a saber, declaraciones ante las autoridades ministerial y judicial y dictámenes periciales en psicología, entre otros.

² Fojas 676 a 697 del procedimiento de responsabilidad.

De igual forma, determinó la reclasificación de la conducta denunciada como falta grave y, por tanto, estableció que debía conocer del procedimiento de responsabilidad administrativa el Tribunal Pleno y no el Presidente.

En cumplimiento a la determinación ordenada por el Ministro Presidente, el Contralor por acuerdo de diez de mayo de dos mil doce, señaló que en diverso proveído de diecisiete de abril del citado año, se tuvo por recibida copia certificada del oficio dos mil quinientos diez, así como de la sentencia dictada en la causa penal *****, de la que se advierte la referencia a los elementos de prueba que se desahogaron en ese proceso, para determinar que el servidor público incurrió en el *****, por lo que, apuntó que esa sentencia constituía un elemento documental que contenía información necesaria para integrar el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Asimismo, indicó que en virtud de que el Ministro Presidente reclasificó la conducta denunciada como falta grave, el expediente debía remitirse a la Presidencia de este Alto Tribunal, a fin de que se determinara si la copia certificada de la sentencia referida, constituye elemento de prueba suficiente y, en su caso, de ser procedente, se dictara el acuerdo de inicio de procedimiento por falta grave.

Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil doce, el Ministro Presidente tuvo por recibido el oficio suscrito por el Contralor de este Alto Tribunal y determinó que podía tomarse en cuenta la copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal *****, ordenando el reinicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.

DÉCIMO SEGUNDO. Segundo dictamen de la Contraloría. El treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen en el que consideró que el servidor público ***** probablemente dejó de observar lo dispuesto en el artículo 8, fracciones I, VI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esta última en relación con los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 y 34 de la Convención de los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 3, 4, 11, 13, 19 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para ello, analizó los elementos de prueba que conforman el expediente, así como diversas disposiciones correspondientes a los ordenamientos mencionados, y expuso los argumentos por los que estimó que las infracciones atribuidas a ese servidor público se tienen por acreditadas, concluyendo que la conducta desplegada constituye una falta administrativa grave de la que debía conocer el Tribunal Pleno, en términos de los artículos 24, párrafo segundo, 25, primer párrafo y 33 del Acuerdo General Plenario 9/2005, tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

“*****”³.

DÉCIMO TERCERO. Reinicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Con base en el dictamen anterior (segundo), el Presidente de este Alto Tribunal, el doce de junio de dos mil doce, determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra *****⁴, por infracciones graves, en los siguientes términos:

“*****”⁴.

³ Fojas 770 a 798 del procedimiento de responsabilidad.

DÉCIMO CUARTO. Trámite. En cumplimiento a esa determinación, se ordenó notificar personalmente al servidor público ***** el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de defensa, en la que debía rendir declaración en relación con las conductas que se le atribuyen, ofrecer pruebas y defensas que a su derecho conviniera.

Como consecuencia de lo anterior, se levantó acta de la audiencia de diez de julio de dos mil doce, en la que compareció el servidor público, quien formuló manifestaciones verbales y escritas, así como ofreció pruebas documentales, testimoniales y confesionales, cuyo acuerdo se reservó mediante proveído de esa fecha.

Por acuerdo de once de septiembre de dos mil doce, se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por el servidor público; se desechó la pericial en materia de psicología que debía practicarse a la menor *****; se requirió al oferente para que precisara el objeto de la confesional a cargo de *****, *****, ***** y *****, y exhibiera los pliegos de posiciones que en su caso se formularían, apercibido que de no hacerlo, se le tendría por desechado dicho medio de prueba; por lo que hace a las testimoniales se tuvieron por admitidas las ofrecidas a cargo de *****, *****, *****, ***** y *****.

En el mismo auto se precisó que por lo que hace a la prueba consistente en las “ampliaciones de declaración de los peritos”, no existe en la legislación procesal federal de aplicación supletoria ese medio de prueba; sin embargo, se aclaró que de la copia certificada de la sentencia condenatoria dictada el doce de abril de dos mil doce, en

⁴ Fojas 799 a 827 del procedimiento de responsabilidad.

la causa penal *****, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, se tiene que dentro de los elementos de prueba que ahí se describen, están los dictámenes periciales en materia de psicología rendidos por *****, *****, *****, ***** y ***** y constancia de la junta de peritos en materia de psicología de quince de junio de dos mil once, entre las expertas ***** y *****, en relación con las discrepancias que presentaron sus dictámenes relativos a los rasgos de personalidad de *****, aclaración con la cual se reforzó la decisión de desechar la llamada “ampliación de declaración”.

Por último, se admitieron la presuncional y la instrumental de actuaciones.

Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil doce, entre otras cuestiones, se tuvo por admitida la confesional a cargo de *****, *****, ***** y *****, además, se señaló día y hora para su celebración.

DÉCIMO QUINTO. Prueba superveniente. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil doce, se tuvo por recibido el escrito del servidor público en el que ofrece la prueba superveniente consistente en el original del oficio DCP/SCP/2402-AP/12, suscrito por el Director de Colegios de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, que refiere que ***** y *****, no tienen antecedentes profesionales registrados en esa Dirección General, como psicóloga y profesionista, respectivamente, personas que suscribieron el informe de once de agosto de dos mil nueve, de los talleres “Juguemos a cuidar nuestro cuerpo”, impartidos por la ***** (*****).

Al respecto, se aclaró en dicho acuerdo que el escrito a través del que se adjuntó el referido oficio, carecía de firma; por lo que, no se emitió pronunciamiento alguno sobre la calidad de superveniente de la prueba referida y, por tanto, el original de ese oficio sólo se agregó al expediente para los efectos que considerara procedente la autoridad a quien competa resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Posteriormente, mediante acuerdo de ocho de noviembre siguiente, se tuvo por recibido el diverso escrito del servidor público en el que nuevamente ofreció como prueba superveniente el oficio DCP/SCP/2402-AP/12, arriba destacado; y en relación con éste se aclaró que no se estaba ante una situación de superveniencia, puesto que, si bien el funcionario público señaló que las personas que emitieron el informe a cargo de la ***** mencionada (*****), se ostentaron como psicólogas, tal circunstancia no ocurrió después de que se celebrara la audiencia de defensas; por tanto, se concluyó, que el referido oficio no tiene el carácter de superveniente.

DÉCIMO SEXTO. Desahogo de confesionales. Mediante actas de veinticuatro de octubre de dos mil doce, asentadas ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte, comparecieron las personas respecto de las cuales se ofreció confesional y al efecto acudieron ***** , ***** , ***** y ***** .

DÉCIMO SÉPTIMO. Desahogo de testimoniales. Mediante actas asentadas el diez de enero de dos mil trece, ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte, comparecieron las personas

respecto de las cuales se ofreció testimonial, para lo cual se presentaron ****, ****, ****, **** y ****.

DÉCIMO OCTAVO. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil trece, al advertir que ya no existían pruebas pendientes por desahogar, se cerró la instrucción y se ordenó turnar el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán, para la formulación del proyecto correspondiente.

DÉCIMO NOVENO. Dictado de la resolución. Mediante resolución de tres de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, determinó reponer el procedimiento con base en las consideraciones siguientes:

“*****”5.

VIGÉSIMO. Reposición del procedimiento. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución transcrita, mediante acuerdo de siete de abril de dos mil catorce, se ordenó notificar personalmente a ***** la reposición del procedimiento; se solicitó al Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que proporcionara copia certificada de diversas constancias de la causa penal *****, además se designó a la perito en psicología *****, para que practicara la prueba pericial en psicología al servidor público mencionado y, se concedió a este último un plazo de tres días para designar perito en la referida materia.

VIGÉSIMO PRIMERO. Desahogo de la vista, designación de perito y exhibición de constancias. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil catorce, se tuvo a *****, desahogando la vista referida y designando como perito en psicología a *****, y ofreciendo como

pruebas las documentales consistentes en copia certificada del dictamen técnico de doce de junio de dos mil trece, practicado a la menor *****, así como copia certificada de la ampliación del dictamen pericial en materia de psicología de veintisiete de febrero de dos mil trece y formuló alegatos.

En el mismo acuerdo se tuvieron por recibidas copias certificadas de diversas constancias de la causa penal ***** remitidas por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales; así como informando que ***** promovió el amparo directo ***** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en los autos del toca *****, del índice del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; además se designó a la perito en psicología ***** a fin de que practicara la experticia ordenada por el Tribunal Pleno, por lo que se le requirió para que se presentara a aceptar y protestar el cargo.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Trámite de la pericial en psicología.

Por auto de veintidós de mayo de dos mil catorce, se requirió al denunciado para que exhibiera el título en psicología de la perito (*****) que designó, lo cual cumplimentó en comparecencia de doce de junio del citado año.

En virtud de lo anterior, se dio vista a las especialistas en psicología, por el plazo de quince días, a efecto de imponerse de los autos para estar en posibilidad de rendir el dictamen correspondiente; por lo que, una vez transcurrido dicho plazo, mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil catorce, se señalaron fechas para la práctica de los exámenes que conforme a su especialidad estimaran

⁵ Fojas 1084 a 1127 del procedimiento de responsabilidad.

pertinentes y se precisaron los puntos materia de la pericial en psicología que la perito oficial *****, debía desahogar.

Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil catorce, se tuvo por recibido el estudio criminológico practicado a ***** en la causa penal *****, el cual fue solicitado por la perito oficial *****, consecuentemente se requirió a esta última, a efecto de que rindiera el dictamen correspondiente. En el mismo acuerdo, se tuvo por recibido el escrito de la perito *****, por medio del cual rindió y ratificó el dictamen en psicología que practicó con antelación, al servidor público referido.

Posteriormente, la perito ***** desahogó en tiempo y forma el requerimiento respectivo; además, por auto de veintiocho de agosto de dos mil catorce, se determinó que de los dictámenes exhibidos se advierte que las especialistas arribaron a conclusiones diferentes, por lo que se estimó necesario designar a la perito *****, como tercero en discordia, quien compareció el cuatro de septiembre del citado año a cumplir con su designación y solicitó copias de los dictámenes periciales sobre los que surgió la discordancia, además de acceso al expediente y manifestó la necesidad de examinar al probable responsable para estar en posibilidad de emitir su opinión técnica, lo cual ocurrió en diligencias de veinticuatro y veinticinco de septiembre de la referida anualidad.

VIGÉSIMO TERCERO. Dictamen de la perito tercero en discordia. El diez de octubre de dos mil catorce, *****, compareció para entregar el dictamen pericial que le correspondía y en esa diligencia lo ratificó.

VIGÉSIMO CUARTO. Conclusión de la substanciación del procedimiento y turno a ponencia. Al no existir pruebas pendientes

por desahogar, ni otras diligencias por llevar a cabo, se consideró que el expediente estaba debidamente integrado y se ordenó el envío a la Secretaría General de Acuerdos para el turno respectivo; por lo que el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó devolver los autos para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán, para que diera cuenta con el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, párrafos segundo y quinto, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XII, 11, fracción XXI, y 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, fracción II, y 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 24, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, dictado por este Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril del mismo año, en virtud de que se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de un servidor público de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se le atribuyeron faltas consideradas como graves, lo que da lugar a que sea este Tribunal Pleno el que analice y resuelva sobre las responsabilidades que se atribuyen al servidor público.

SEGUNDO. Precisiones. Para una mayor comprensión del asunto que nos ocupa, el estudio se desarrollará en tres apartados, a saber.

I. Calidad de servidor público (Considerando tercero).

II. Comprobación de las conductas atribuidas al servidor público, así como la plena responsabilidad en la comisión. (Considerando cuarto).

III. Para el caso de que proceda, la sanción que deberá imponerse. (Considerando quinto).

TERCERO. Calidad de servidor público. De las copias certificadas remitidas por la Dirección General de Personal, se advierte que el funcionario a quien se siguió el procedimiento tenía la calidad de servidor público en la época en que acontecieron las conductas que se le atribuyen, ya que *****, se desempeñaba como técnico en previsión social, rango E, nombramiento definitivo desde el dieciséis de marzo de dos mil cinco, adscrito a la Dirección del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se advierte de la copia certificada del nombramiento.⁶

CUARTO. Comprobación de las conductas atribuidas al servidor público, así como la plena responsabilidad en la comisión.

En principio, cabe acotar que las conductas que se le imputan al servidor público referido, como constitutivas de causas de responsabilidad, fueron precisadas por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el proveído de doce de junio de dos mil doce, mediante el cual reinició el procedimiento de responsabilidad administrativa y son las siguientes:

“*****”⁷

Como se observa, al servidor público involucrado en este procedimiento administrativo se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 8, fracciones I, VI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa disposición es del tenor siguiente:

“Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; (...).

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; (...).

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público; (...).”

En cuanto a la primera de las conductas en comento, la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece la obligación de todo funcionario de cumplir el servicio que le es encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que conlleve la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique algún abuso o ejercicio indebido del cargo. Es decir, debe evitarse el abuso con motivo del cargo encomendado, que también implica aprovecharse de la postura de superioridad con motivo del cargo, ya que las facultades que posee sólo pueden desplegarse en términos de los fines que engloba el puesto y el propio servicio público.

⁶ Foja 16 del cuaderno de pruebas 1.

⁷ Fojas 799 a 827 del procedimiento de responsabilidad.

Por otra parte, en atención a lo previsto en la fracción VI, del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todo funcionario público está obligado a observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

Los principios tutelados por esta fracción son la buena conducta, el respeto y la rectitud, deberes cuya especial relevancia responde a la exigencia de que los servidores públicos que se desempeñen dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben observar buena conducta al realizar las funciones que tengan asignadas, para lo cual deben tratar con respeto y rectitud a las personas con las que tengan relación con motivo de aquél; por lo que quienes se apartan de esa obligación incurren en infracción.

Ahora, respecto a lo establecido en la fracción XXIV, del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cabe precisar que ésta alude de manera general al cumplimiento del principio de legalidad. Es decir, es una norma de “remisión tácita” que al hacer una remisión a cualquier disposición normativa, vela por el cumplimiento del resto de los principios que rigen el servicio público, esto es, la honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia.

Luego, se impone un deber de actuación en sentido amplio, realizando todas las acciones u omitiendo las que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.

Dicha obligación guarda íntima relación con la contenida en la fracción I que fue expuesta con antelación, puesto que en ambas disposiciones se establece el compromiso de los servidores públicos de cumplir con la máxima diligencia el servicio que les es encomendado con la finalidad de salvaguardar los pilares constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia en el desempeño de la función pública. Por tanto, la fracción XXIV debe relacionarse con lo previsto en la fracción I del artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Como consecuencia de lo anterior, se atribuye de igual manera al servidor público, la infracción señalada en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece:

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:
(...) XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; (...).”

Por otra parte, es importante resaltar que respecto a la gravedad de la conducta del servidor público, en el citado proveído de doce de junio de dos mil doce, se estableció que debe tomarse en consideración que en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación⁸, en relación con el numeral 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

⁸ “**Artículo 136.** Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Públicos⁹, se establece que “en todo caso”, serán consideradas faltas graves los actos y omisiones específicamente señalados en ciertos preceptos legales, que en concreto son: el incumplimiento de los deberes establecidos en las fracciones VIII y X a XIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las infracciones señaladas en las fracciones I a VI del artículo 131 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como las descritas en el artículo 101 constitucional.

No obstante, si en el texto legal se dispuso que ciertas conductas “en todo caso” son graves, ello no significa que sean las únicas que pueden considerarse como graves, es decir, no conduce a afirmar que se trata de una enumeración taxativa, que deba interpretarse que los actos u omisiones ahí descritos y enumerados sean los únicos que actualizan una falta grave, ya que otros actos u omisiones de los servidores públicos, distintos a los enumerados, aunque en ocasiones pudieran constituir faltas leves, en otras pueden convertirse en faltas graves en razón de las circunstancias de cada caso y de la naturaleza del acto mediante el cual se incumplió un determinado deber o se violó una prohibición; lo que se robustece, si se toma en cuenta que en

Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las fracciones XI, XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

⁹ “**Artículo 13.** Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

términos del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, existen elementos que han de analizarse para medir la gravedad de toda conducta que constituye falta administrativa.

Por ende, a pesar de que en las fracciones I en relación con la XXIV y VI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se prevén infracciones que deban considerarse “en todo caso” como graves, en términos de los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13 de la propia Ley Federal de Responsabilidades mencionada, como se estableció en el proveído de doce de junio de dos mil doce, en este asunto, atendiendo a las circunstancias particulares de las conductas mediante las cuales se incurrió en el incumplimiento de dichos deberes, se actualiza una infracción administrativa grave.

Una vez sentado lo anterior, procede relatar y analizar el material probatorio que obra en autos, a saber.

I. Pruebas del procedimiento de responsabilidad administrativa.

1. Copia certificada del expediente personal del servidor público *****¹⁰, del que se advierten, entre otros, los siguientes documentos:

-Currículum vitae;

-Contrato de Cuenta Individual del Sistema de Ahorro para el Retiro;

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado”.

¹⁰ Fojas 175 a 216 del expediente de responsabilidad y cuaderno de pruebas 1.

-Hoja única de servicios expedida por Aeropuertos y Servicios Auxiliares a favor del servidor público;

-Nombramientos;

-Formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por el bono de pensión.

-Copia de la credencial para votar con fotografía.

-Recibos de pago;

-Formato de solicitud para el otorgamiento de días económicos;

-Licencias médicas;

-Diplomas, constancias y certificados por haber acudido a diversos cursos;

-Escrito de aceptación de cambio de horario;

-Retardos y;

-Reporte de evaluación psicológica.

2. Copia certificada del expediente de la menor afectada¹¹, el cual contiene diversos documentos, dentro de los que destacan: historial clínico pediátrico; recetas médicas; estudios de laboratorio; cartilla de vacunación; reporte psicológico parcial; ficha de identificación; recibos de pago de la madre de la menor, así como constancia de horario y solicitud de ingreso al Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de este Alto Tribunal.

3. Copias certificadas de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al Centro de Desarrollo Infantil, a saber:

¹¹ Fojas 218 a 437 del procedimiento de responsabilidad.

- Acuerdo General de Administración VII/2006 de veintidós de junio de dos mil seis, del Comité de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se establecen las normas y lineamientos para la admisión y funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de este Alto Tribunal.¹²
- Lineamientos de quince de julio de dos mil ocho, relativos al procedimiento para que los servidores públicos de este Alto Tribunal reciban el apoyo para el pago de la prestación de Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), guarderías o instituciones autorizadas para impartir educación preescolar cuando sus hijos de sesenta días y hasta cinco años once meses de edad, no alcancen lugar en el CENDI de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹³.
- Lineamientos Generales para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal¹⁴.
- Manuales de Procedimiento y Organización del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” vigentes en dos mil ocho y dos mil nueve¹⁵.

Normatividad relativa a las disposiciones que establece la Dirección de Educación Inicial y Preescolar de la Secretaría de Educación Pública¹⁶, a saber:

- Adquisición y Desarrollo Pleno de Competencias Comunicativas Hablar, Escuchar, Leer y Escribir.
- Consejo Técnico Escolar “Espacios de construcción y toma de decisiones”.
- Educación Artística.
- El cuidado del ambiente, un aprendizaje que se forma desde la educación inicial.

¹² Fojas 454 a 466 del procedimiento de responsabilidad.

¹³ Foja 467 a 473 del procedimiento de responsabilidad.

¹⁴ Foja 474 a 518 del procedimiento de responsabilidad.

¹⁵ Tomo 2 del cuaderno de pruebas.

¹⁶ Tomo 3 del cuaderno de pruebas.

- Formación ciudadana.
- Guía general para la observación directa en el aula. Lactantes, maternales y preescolar.
- Implementos Didácticos.
- Indicadores de calidad educativa.
- Lineamientos sobre procedimiento de trabajo.
- Orientaciones técnico pedagógicas sobre las situaciones educativas en planteles escolares.
- Programa interno de seguridad y emergencia escolar.
- Proyecto escolar indicadores.
- Reflexiones en torno al proyecto escolar 2008-2009.
- Tiempo de volver a la escuela.

De las que se advierte el comportamiento, funciones y cuidados a seguir por parte de los maestros que prestan servicios en el Centro de Desarrollo Infantil, durante dos mil ocho y dos mil nueve.

4. Audiencia de defensas de diez de julio de dos mil doce, en la que comparece ***** y exhibe escrito mediante el cual realiza la contestación a la denuncia presentada en su contra.¹⁷

En este punto, cabe precisar que con motivo de la reposición del procedimiento decretado mediante acuerdo de siete de abril de dos mil catorce, se ordenó el desahogo de la pericial en materia de psicología con el propósito de conocer el estado psicológico y emocional, rasgos de personalidad y la posible existencia de alguna psicopatología de cualquier tipo, específicamente, de aquellas de naturaleza ***** de *****¹⁸, y al efecto se emitieron los siguientes dictámenes:

¹⁷ Fojas 834 a 854 del procedimiento de responsabilidad.

¹⁸ Fojas 1130 a 1132 del procedimiento de responsabilidad.

5. Dictamen pericial de siete de agosto dos mil catorce, rendido por *****, practicado en este procedimiento de responsabilidad, a *****, probanza ofrecida por este último:

“*****”¹⁹.

6. Dictamen de la perito oficial de dieciocho de agosto de dos mil catorce, rendido por *****, practicado a *****, en este procedimiento de responsabilidad:

“*****”²⁰.

En virtud de que las conclusiones de los anteriores dictámenes eran discrepantes, se designó como perito tercero en discordia a ***** (acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil catorce)²¹.

7. Dictamen pericial en materia de psicología de diez de octubre de dos mil catorce, rendido por la perito tercero en discordia ***** practicado a *****, en este procedimiento de responsabilidad:

“*****”²².

II. Pruebas de la causa penal ***.**

Tramitada ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (respecto de hechos relacionados con este asunto), medios probatorios que se

¹⁹ Fojas 1263 a 1288 del procedimiento de responsabilidad.

²⁰ Fojas 1294 a 1398 del procedimiento de responsabilidad.

²¹ Fojas 1429 y 1430 del procedimiento de responsabilidad.

²² Fojas 1447 a 1537 del procedimiento de responsabilidad.

solicitaron para ser tomados en consideración en el procedimiento administrativo de responsabilidad que nos ocupa.

1. Dictamen pericial en materia de psicología de catorce de julio de dos mil nueve, practicado en la averiguación previa ***** , por ***** a la menor *****.²³

2. Declaración de la menor ***** rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil nueve.²⁴

3. Declaración de la menor ***** rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de catorce de abril de dos mil diez.²⁵

4. Dictamen en materia de psicología rendido por ***** , adscrita a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, de diecinueve de mayo de dos mil diez, practicado a la menor ***** , durante el desarrollo de la averiguación previa.²⁶

5. Declaración de la menor ***** , rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, a las veinte horas con cero minutos del dieciséis de junio de dos mil diez.²⁷

6. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diez, mediante el cual se ordena la reanudación del procedimiento, se

²³ Fojas 5 a 10 del cuaderno 4 de pruebas.

²⁴ Fojas 11 y 12 del cuaderno 4 de pruebas.

²⁵ Fojas 1 a 4 del cuaderno 4 de pruebas.

²⁶ Fojas 24 a 51 del cuaderno 4 de pruebas.

²⁷ Fojas 53 a 55 del cuaderno 4 de pruebas.

decreta la detención legal de ***** y se señala fecha para la declaración preparatoria.²⁸

7. Auto de formal prisión de treinta de septiembre de dos mil diez.²⁹

8. Estudio criminológico practicado a ***** el siete de octubre de dos mil diez, por la Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, durante el desarrollo del proceso penal.³⁰

9. Desahogo de las testimoniales a cargo de *****, *****, *****, *****, ***** y *****, así como ratificación del dictamen formulado por la perito *****, llevadas a cabo en diligencia de diez de noviembre de dos mil diez.³¹

10. Ampliación de declaración de *****, de dieciséis de noviembre de dos mil diez rendida ante el Juzgado del conocimiento.³²

11. Pericial en materia de psicología rendida por ***** que se practicó a *****, de dieciséis de noviembre de dos mil diez.³³

12. Pericial en psicología rendida por *****, adscrita a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, practicado a *****.³⁴

²⁸ Fojas 608 a 610 del procedimiento de responsabilidad.

²⁹ Fojas 582 a 606 del procedimiento de responsabilidad.

³⁰ Fojas 1260 a 1261 del procedimiento de responsabilidad.

³¹ Fojas 56 a 75 del cuaderno de 4 pruebas.

³² Fojas 73 a 75 del cuaderno 4 de pruebas.

³³ Fojas 76 a 86 del cuaderno 4 de pruebas.

13. Ratificación del contenido y firma del dictamen a cargo de la psicóloga *****, de dieciséis de diciembre de dos mil diez.³⁵

14. Ampliación de la declaración de la menor ***** rendida ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el nueve de febrero de dos mil once.³⁶

15. Auto de treinta y uno de mayo de dos mil once, mediante el cual se decretó el cierre de instrucción.³⁷

16. Junta de peritos en materia de psicología realizada ante el Juzgado de referencia, el quince de junio de dos mil once.³⁸

17. Dictamen en materia de psicología rendido por *****, perito tercero en discordia, que se practicó a *****, el dos de agosto de dos mil once.³⁹

18. Dictamen en materia de psicología rendido por *****, perito adscrita a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, de veintinueve de septiembre de dos mil once, practicado a *****.⁴⁰

19. Junta de peritos en materia de psicología a cargo de ***** y *****, de diecisiete de enero de dos mil trece.⁴¹

20. Ampliación del dictamen pericial en materia de psicología a cargo del perito *****, de veintisiete de febrero de dos mil trece.⁴²

³⁴ Fojas 87 a 107 del cuaderno 4 de pruebas.

³⁵ Fojas 108 a 109 del cuaderno 4 de pruebas.

³⁶ Fojas 110 a 113 del cuaderno 4 de pruebas.

³⁷ Foja 674 del procedimiento de responsabilidad.

³⁸ Fojas 115 a 128 del cuaderno 4 de pruebas.

³⁹ Fojas 129 a 138 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴⁰ Fojas 141 a 157 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴¹ Fojas 158 a 163 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴² Fojas 164 a 166 del cuaderno 4 de pruebas.

21. Informe de ***** de veintisiete de febrero de dos mil trece, al que acompañó baterías psicológicas practicadas a la menor ***** el tres de mayo de dos mil diez.⁴³

22. Dictamen en psicología de veintitrés de abril de dos mil trece, rendido por *****, perito tercero en discordia, adscrita al Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, practicado a la menor *****.⁴⁴

23. Dictamen técnico de doce de junio de dos mil trece, practicado a la menor ***** o por el licenciado en psicología *****, adscrito al Hospital Pediátrico de Iztacalco, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal.⁴⁵

24. El doce de abril de dos mil doce se dictó sentencia condenatoria en la que se resolvió, entre otras cuestiones, lo que sigue:

“*****”.⁴⁶

25. Inconformes, tanto *****, como el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpusieron recursos de apelación, de los que conoció el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, registrándolos con el toca penal ***** y por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil doce, se modificó la sentencia condenatoria, para el único efecto de precisar que en caso de que el acusado se acogiera al beneficio de la condena condicional, la sanción de suspensión de derechos civiles siguiera la misma suerte

⁴³ Fojas 167 a 179 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴⁴ Fojas 180 a 194 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴⁵ Fojas 195 a 207 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴⁶ Foja 211 del cuaderno 4 de pruebas.

que la suspensión de la pena de prisión y, por ende, quedara también en suspenso su ejecución.

26. No estando de acuerdo, ***** promovió juicio de amparo directo, el que se registró con el expediente D.P. ***** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que por ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil doce le concedió el amparo y en cumplimiento a la ejecutoria, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, (toca penal *****) dictó sentencia el tres de diciembre del citado año, revocó la apelada y ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de que se fijara fecha y hora para que se desahogara la junta de las peritos en psicología ***** y ***** , a fin de que dilucidaran sus discrepancias y de subsistir, se nombrara un perito tercero en discordia, hecho lo cual se continuaría con el procedimiento hasta dictar sentencia.

27. Atento a lo anterior, mediante sentencia condenatoria de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** , del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, instruida a ***** , por su responsabilidad penal en la comisión de delito de ***** , se resolvió lo que sigue:

“*****”⁴⁷.

Las consideraciones que originaron los anteriores puntos resolutivos, son esencialmente, las siguientes:

“*****”⁴⁸.

⁴⁷ Fojas 210 a 285 del cuaderno 4 de pruebas.

⁴⁸ Fojas 259 a 274 del cuaderno 4 de pruebas.

28. Inconformes, tanto *****, como el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpusieron recursos de apelación, los que se turnaron al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el que los registró con el toca ***** y por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, resolvió lo que sigue:

“*****”⁴⁹.

29. No estando de acuerdo, *****, promovió juicio de amparo directo ***** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que mediante sentencia de uno de octubre de dos mil catorce, resolvió lo siguiente:

“*****”⁵⁰.

En relación con las probanzas de la causa penal, cabe precisar que si bien no se desahogaron en este procedimiento de responsabilidad administrativa, lo cierto es que al tener el carácter de documentos públicos es factible tomarlos en cuenta para la resolución de este asunto.

En efecto, no es óbice que las constancias en mención se hayan desahogado en una averiguación previa y en un proceso penal, ya que observando lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme a los artículos 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil cinco y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para conocer la verdad puede el juzgador valerse de

⁴⁹ Fojas 286 a 311 del cuaderno 4 de pruebas.

⁵⁰ En la foja 312 del cuaderno 4 de pruebas se hace alusión al juicio de amparo y la sentencia se obtuvo de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con las conductas controvertidas.

Al respecto resulta aplicable en lo conducente la tesis que a continuación se reproduce:

“PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. SON ADMISIBLES COMO TALES LAS COPIAS CERTIFICADAS DE PERITAJES Y DECLARACIONES TESTIMONIALES PROVENIENTES DE UNA AVERIGUACIÓN PENAL. SU VALORACIÓN. Si, conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, las copias certificadas de peritajes y declaraciones de terceros derivadas de una averiguación penal, aunque por sí mismas no pueden tener en el juicio de garantías el valor propio de las pruebas pericial y testimonial, son documentales que tienen el valor de indicios que deben tomarse en cuenta y analizarse por el juzgador en relación con los demás elementos probatorios **aportados por las partes**”. (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Tesis Aislada, Volumen 139-144, Tercera Parte, página 111, Genealogía: Informe 1980, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 141, página 113. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, novena tesis relacionada con la jurisprudencia 226, página 382, número de registro IUS: 237851).

Por tanto, las constancias relatadas se toman en cuenta para la resolución de este asunto.

III. Pruebas de ***.**

Por su parte, el servidor público ofreció como pruebas dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad las que a continuación se relacionan. Cabe destacar que en la enunciación de éstas, se eliminan las que no le fueron admitidas, así como aquélla de

la que desistió, consistente en la pericial en materia de psicología que ***** practicaría a la menor afectada.⁵¹

A continuación se enuncian los escritos de ofrecimiento de pruebas, en orden cronológico, a saber:

Primer escrito de ofrecimiento de pruebas (diez de septiembre de dos mil nueve):⁵²

A. Documental consistente en copia certificada del dictamen pericial en psicología (formulado en la averiguación previa *****), por *****, adscrita a la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

“*****”⁵³.

B. Fotografía que representa el área del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” en la que el servidor público desarrollaba sus actividades.⁵⁴

C. Testimoniales rendidas ante la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de:

“*****”⁵⁵.

“*****”⁵⁶.

⁵¹ Proveído en el que se acuerda el desistimiento foja 169 del procedimiento de responsabilidad.

⁵² Fojas 53 a 60 del procedimiento de responsabilidad.

⁵³ Fojas 80 a 84 del procedimiento de responsabilidad.

⁵⁴ Foja 62 del procedimiento de responsabilidad.

⁵⁵ De doce de noviembre de dos mil nueve, visible a fojas 157 a 160 del procedimiento de responsabilidad.

⁵⁶ De doce de noviembre de dos mil nueve, visible a fojas 165 a 168 del procedimiento de responsabilidad.

“*****”⁵⁷

D. Documentales privadas consistentes en cartas de recomendación respecto de las funciones que desarrolló el servidor público como maestro de cantos y juegos.⁵⁸

E. Presuncional legal y humana.⁵⁹

F. Instrumental de actuaciones.⁶⁰

Segundo escrito de ofrecimiento de pruebas (diez de julio de dos mil doce):⁶¹

A. Copias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la que se investigaron hechos relacionados con este asunto:

- Reporte de evaluación psicológica de *****.⁶²
- Dictamen pericial en psicología practicado a *****, realizado por la perito ***** (presentado ante el juzgado del proceso penal), de dieciséis de noviembre de dos mil diez.⁶³
- Oficio DGRH/DRL/224/2011 de siete de abril de dos mil once, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de esta Suprema Corte, mediante el cual remitió al Juzgado de Distrito indicado, la siguiente documentación: horario de cantos y juegos; horario de labores; y nombre, adscripción y horarios de personal.⁶⁴

⁵⁷ De doce de noviembre de dos mil nueve, visible a fojas 161 a 164 del procedimiento de responsabilidad.

⁵⁸ Fojas 63 a 66 del procedimiento de responsabilidad.

⁵⁹ Fojas 57 y 850 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁰ Fojas 57 y 851 del procedimiento de responsabilidad.

⁶¹ Fojas 840 a 854 del procedimiento de responsabilidad.

⁶² Fojas 855 a 857 del procedimiento de responsabilidad.

⁶³ Fojas 864 a 874 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁴ Fojas 875 a 889 del procedimiento de responsabilidad.

- Ampliación de declaración del procesado ***** de veintinueve de abril de dos mil once rendida ante el juez de la causa:⁶⁵
- Dictamen en materia de psicología (presentado ante el juzgado del proceso penal) realizado por el perito tercero en discordia *****, sobre el estado emocional y rasgos de personalidad, así como la posible existencia de alguna psicopatología de *****.⁶⁶

B. Copia certificada del oficio 333/2010, de veintisiete de octubre de dos mil diez, suscrito por la profesora *****, del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional”, mediante el cual informa el horario, domicilio y teléfono de *****.⁶⁷

C. Copias simples de las carátulas de los siguientes textos:⁶⁸

- “Todos juntos”, para tres, cuatro y cinco años.
- Portada del disco “La ronda. Cantos y Juegos”.
- Revista “A título personal” editada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
- Reportaje “Para encontrarle ritmo a la vida” realizado por *****.
- Copia simple de constancia de la Escuela Normal de Los Reyes de Acaquilpan, otorgada a *****, por la impartición del taller “Ritmos, cantos y juegos”.

D. Confesionales rendidas ante la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo de:

“*****”⁶⁹

⁶⁵ Fojas 890 a 894 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁶ Fojas 895 a 904 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁷ Foja 906 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁸ Fojas 907 a 917 del procedimiento de responsabilidad.

⁶⁹ De veinticuatro de octubre de dos mil doce, visible a fojas 1012 a 1014 del procedimiento de responsabilidad.

“*****” 70

“*****” 71

“*****” 72

E. Testimoniales rendidas ante la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo de:

“*****” 73

“*****” 74

“*****” 75

“*****” 76

“*****” 77

Cabe agregar que en el segundo escrito de pruebas, el servidor público ofreció nuevamente algunos medios de convicción ya ofertados en su primer escrito, a saber, el dictamen pericial de la psicóloga *****; la fotografía del área del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional”; y las cartas de recomendación.

Tercer escrito de ofrecimiento de pruebas (siete de noviembre de dos mil doce):⁷⁸

- Oficio DCP/SCP/2402-AP/12 FOLIO: 8365, de doce de octubre de dos mil doce, suscrito por el Subdirector de Colegios

⁷⁰ De veinticuatro de octubre de dos mil doce, visible a fojas 1017 a 1018 del procedimiento de responsabilidad.
⁷¹ De veinticuatro de octubre de dos mil doce, visible a fojas 1021 a 1023 del procedimiento de responsabilidad.
⁷² De veinticuatro de octubre de dos mil doce, visible a fojas 1026 a 1028 del procedimiento de responsabilidad.
⁷³ De diez de enero de dos mil trece, visible a fojas 1067 a 1069 del procedimiento de responsabilidad.
⁷⁴ De diez de enero de dos mil trece, visible a fojas 1070 a 1072 del procedimiento de responsabilidad.
⁷⁵ De diez de enero de dos mil trece, visible a fojas 1073 a 1075 del procedimiento de responsabilidad.
⁷⁶ De diez de enero de dos mil trece, visible a fojas 1076 a 1078 del procedimiento de responsabilidad.
⁷⁷ De diez de enero de dos mil trece, visible a fojas 1079 a 1081 del procedimiento de responsabilidad.
⁷⁸ Fojas 1031 a 1033 del procedimiento de responsabilidad.

de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, en el que se indica que de la consulta realizada en el sistema del Registro Nacional de Profesiones se obtuvo que ***** y ***** (quienes signaron el informe de la ***** de once de agosto de dos mil nueve), no tienen antecedente como psicóloga y como profesionista, respectivamente.⁷⁹

Cuarto escrito de ofrecimiento de pruebas (veintitrés de abril de dos mil catorce):⁸⁰

A. Copia certificada del dictamen pericial en psicología formulado por el psicólogo *****, practicado a la menor en la causa penal *****.

“*****”⁸¹

B. Copia certificada de la ampliación del dictamen pericial en psicología formulado por *****, practicado a ***** en la causa penal *****, del que se advierte:

“*****”⁸²

Ahora, antes de valorar las pruebas que obran en autos, es preciso establecer que en las decisiones relacionadas con menores de edad, el interés superior del menor debe prevalecer como principio rector; ello en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

⁷⁹ Foja 992 del procedimiento de responsabilidad.

⁸⁰ Fojas 1138 a 1142 del procedimiento de responsabilidad.

⁸¹ De trece de junio de dos mil trece, visible a fojas 1148 a 1160 del procedimiento de responsabilidad.

⁸² Fojas 1143 a 1145 del procedimiento de responsabilidad.

“(...) Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. XLV/2008, de rubro y texto siguientes:

“MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios”. (Emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página setecientos doce, del tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro IUS: 169457).

Además, este Tribunal Pleno observando las disposiciones referidas, debe emitir determinaciones basadas en expedientes en los que el material probatorio sea suficiente y adecuado para la obtención de la verdad, pues en el caso, las infracciones que se atribuyen al servidor público tienen como antecedente la realización de conductas que implican haber faltado al respeto a una menor que era alumna del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de este Alto Tribunal, afectando la integridad y bienestar de la niña; en razón de que, el servidor público aprovechándose de la postura de superioridad con motivo de su cargo, no se condujo con rectitud, buena conducta, ni observó las disposiciones legales conducentes respecto de la referida niña, lo que fortalece la importancia de que esta Suprema Corte se valga de las pruebas necesarias para la obtención de la verdad, como sucede en el caso.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización se reproducen a continuación:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos

controvertidos". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, tesis 1a./J. 30/2013 (10a.), página 401, número de registro IUS: 2003069).

Una vez sentado lo anterior, se procede a la valoración del material probatorio con base en los principios establecidos en los artículos 199⁸³ (confesión), 202⁸⁴ (documentos públicos), 203⁸⁵ (documentos privados), 211⁸⁶ (pericial), 215⁸⁷ (testimonial), 217⁸⁸ (fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia), del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria

⁸³ **"Artículo 199.** La confesión expresa hará prueba plena cuando concurren, en ella, las circunstancias siguientes:

I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;

II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y

III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio".

⁸⁴ **"Artículo 202.** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal".

⁸⁵ **"Artículo 203.** El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.

El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.

Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado".

⁸⁶ **"Artículo 211.** El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal".

⁸⁷ **"Artículo 215.** El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración:

I. Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes;

II. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que depongan;

III. Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto;

IV. Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad;

V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias de otras personas;

VI. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales;

VII. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y

VIII. Que den fundada razón de su dicho".

⁸⁸ **"Artículo 217.** El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.

Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial".

conforme a lo dispuesto en los artículos 4⁸⁹ del Acuerdo General Plenario 9/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil cinco y 47⁹⁰ de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a saber:

De las pruebas que obran en el procedimiento de responsabilidad administrativa se advierte, esencialmente, lo que sigue:

- Copia certificada del expediente personal del servidor público *****, del que se advierten, entre otros los siguientes documentos: currículum vitae; contrato de Cuenta Individual del Sistema de Ahorro para el Retiro; hoja única de servicios expedida por Aeropuertos y Servicios Auxiliares a favor del servidor público; nombramientos; formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por el bono de pensión; copia de la credencial para votar con fotografía; recibos de pago; formato de solicitud para el otorgamiento de días económicos; licencias médicas; diplomas, constancias y certificados por haber acudido a diversos cursos; escrito de aceptación de cambio de horario; retardos y, reporte de evaluación psicológica.

Las anteriores probanzas, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles

⁸⁹ “**Artículo 4.** Para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudirse a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables”.

⁹⁰ “**Artículo 47.** En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

(anteriormente transcrito), aplicado supletoriamente, merecen eficacia probatoria respecto de lo afirmado por las autoridades de las que proceden, así como de las declaraciones que contienen, sin probar la verdad de lo declarado.

- Dictamen pericial en materia de psicología de diez de octubre de dos mil catorce, rendido por la perito ***** practicado a *****, en la que concluyó esencialmente, que de la evaluación realizada a éste y comparando sus características de personalidad con las que presenta comúnmente un *****, se observa que el servidor, si bien presenta algunas características que son compatibles con las de *****, lo cierto es que, eso no significa que haya dado paso al acto delictivo ya que para eso se requieren los factores crimino-impelentes que al momento de la evaluación y con los resultados obtenidos, no se observaron en el evaluado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, anteriormente transcrito, aplicado supletoriamente, la anterior probanza genera convicción para este Alto Tribunal, en virtud de que las conclusiones están justificadas.

- Dictamen pericial de siete de agosto de dos mil catorce, rendido por *****, practicado a *****, en el que concluyó esencialmente, que el servidor público no tiene correlación con las características que la bibliografía especializada señala como aquellas que corresponden a la psicopatología de naturaleza *****.

En términos de lo establecido en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, anteriormente transcrito, aplicado supletoriamente, la anterior probanza, no genera convicción para este

Alto Tribunal, en virtud de que no se adjuntó la batería de las pruebas que se practicaron al funcionario, para justificar las conclusiones del dictamen.

A continuación se valoran las pruebas mediante las cuales el servidor público pretendió desvirtuar la comisión de las conductas atribuidas, de las que en esencia, se advierte lo siguiente:

- ✓ La documental pública consistente en copia certificada del dictamen pericial en psicología, de catorce de julio de dos mil nueve, formulado por *****, adscrita a la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en cuya conclusión cuarta estableció, esencialmente, que la menor no presentaba sintomatología como consecuencia de una *****.

En relación con la probanza relatada, cabe precisar que ésta carece de valor probatorio en términos de lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (anteriormente transcrito), aplicado supletoriamente, motivo por el cual es insuficiente para desvirtuar las conductas atribuidas al servidor público.

Lo anterior es así, porque en esa documental, la perito se limita a realizar un análisis genérico respecto a las causas de las conductas, sin que tenga una base razonadamente aceptable, en la que se tomen en cuenta los conocimientos técnicos científicos que por su área del conocimiento le exigen o que por su experiencia le dicte; ello, en virtud de que tampoco se motivan, ni justifica las conclusiones, dado que se omite expresar las reglas técnicas o científicas aplicadas para sustentar el resultado técnico de esa valoración psicológica, por lo

que, no aporta elementos de convicción que justifiquen los conocimientos especiales que resultan necesarios para que la autoridad resuelva las conductas materia de análisis; consecuentemente, los resultados de la pericial de mérito, que obra en copia certificada, resultan insuficientes para desvirtuar las conductas atribuidas al servidor público.

- ✓ La fotografía que representa el área del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que el servidor público desarrollaba las actividades que le correspondían y en la que se aprecia al funcionario con una guitarra frente a un grupo de menores y dos personas adultas del sexo femenino con uniforme de cuadros negros y grises.

La prueba anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles (anteriormente transcrito), aplicado supletoriamente, carece de eficacia probatoria para los fines para los cuales fue ofrecida, relativos a desvirtuar las conductas atribuidas al servidor público, ya que únicamente demuestra que fue tomada en cierta época y lugar, sin que con ello se logren desestimar las imputaciones que existen en contra del funcionario público.

- ✓ Testimoniales rendidas ante la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de *****, ***** y *****, de las que se advierte, esencialmente, que manifestaron que conocían al servidor público porque es el maestro de música de la clase de cantos y juegos en el Centro de Desarrollo Infantil, que el funcionario sólo era un apoyo para la maestra titular y la asistente; que el servidor al desarrollar sus funciones no se encontraba solo con el grupo, ya que tanto la maestra de grupo,

como la asistente estaban presentes y la clase se impartía en un área abierta; que dentro de las actividades que desarrollaba el servidor no existe ningún momento en que se encontrara en privado con los menores; que en el área en que se desarrollaba la clase no existe ningún impedimento visual en donde no se detectara la presencia del maestro porque todos los salones tienen ventanas hacia los pasillos; que dentro de las funciones del servidor no estaba la de acompañar a los infantes a los sanitarios, porque ésta la desempeñaban las asistentes y que el servidor público no tenía contacto físico con los infantes.

- ✓ Testimoniales rendidas ante la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo de ***** y, *****, las que, esencialmente, manifestaron que el servidor público en ningún momento se encontraba en privado con los menores, ya que siempre estaba acompañado por una maestra; que en el área en que se desarrollaban las funciones del funcionario no existía algún impedimento visual en donde no se detectara la presencia de éste, ya que todo era visible precisamente para estar checando a los niños; que las personas encargadas de acompañar a los infantes al sanitario era la asistente educativa o la titular del grupo en caso de la ausencia de la asistente o, se apoyaba en otra persona, tales como la psicóloga o la coordinadora; que el funcionario tenía una relación cordial y respetuosa con los niños al impartir clases.

Las anteriores testimoniales carecen de valor probatorio, en términos de lo establecido en el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles (anteriormente transcrito), aplicado supletoriamente, porque no aportan información suficiente para desacreditar las infracciones atribuidas al servidor público, ya que del

análisis de lo relatado, se advierte que no generan algún indicio de haber presenciado la realización de las conductas imputadas al funcionario, es decir, que por sí mismos las hayan conocido.

- ✓ Documentales privadas consistentes en cartas de recomendación (entre otras, la expedida por el Director de Programas Sociales de este Alto Tribunal) respecto de las funciones que desarrolló como maestro de cantos y juegos en diversas instituciones educativas.

De las documentales privadas relatadas, en términos de lo establecido en el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles (anteriormente transcrito), aplicado supletoriamente; sólo se exaltan cualidades del servidor público consistentes en: respeto, honorabilidad, honestidad, responsabilidad, trabajo y compromiso; empero, carecen de valor probatorio para desvirtuar la comisión de las conductas atribuidas al funcionario, ya que sólo constituye un documento en el que constan diversas aseveraciones, sin que se acrediten éstas.

- ✓ La presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, respecto de las cuestiones que le favorezcan.
- ✓ Copias certificadas de diversas constancias de la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, relativas al: reporte de evaluación psicológica de ***** (de la que se advierte, entre otras cuestiones, que es una persona tranquila, tímida y sensible, se comporta de manera normal, logra trabajar en equipo, tiene empatía con los niños y, es apegado a las instrucciones de sus superiores); copia certificada del oficio 333/2010, de veintisiete de octubre de dos mil diez, suscrito por

la profesora *****, del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional”, mediante el cual informa el horario, domicilio y teléfono de *****; dictamen pericial en psicología practicado al servidor público, realizado por la perito *****, de dieciséis de noviembre de dos mil diez (en la que se concluyó que se descarta la existencia de alguna psicopatología); oficio DGRH/DRL/224/2011 de siete de abril de dos mil once, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de esta Suprema Corte, del que se advierte el horario de cantos y juegos; horario de labores, nombre, adscripción y horarios del personal.

- ✓ Ampliación de declaración del procesado ***** de veintinueve de abril de dos mil once rendida ante el juez de la causa (en la que manifestó las actividades que realizaba como maestro de música; el grupo al que pertenecía la menor, la interacción que tenía con el grupo; y la descripción del lugar de clase); el dictamen en materia de psicología de dos de agosto de dos mil once, realizado por el perito tercero en discordia *****, sobre el estado emocional y rasgos de personalidad, así como la posible existencia de alguna psicopatología del servidor público (del que se advierte que no se encontró la existencia de alguna psicopatología); copias simples de las carátulas de diversos textos (revista y reportaje), así como de la portada de un disco compacto; copia simple de una constancia de la Escuela Normal de Los Reyes de Acaquilpan, otorgada a *****, por la impartición del taller “Ritmos, cantos y juegos”.
- ✓ Copia certificada del dictamen pericial en psicología, de doce de junio de dos mil trece, formulado por el psicólogo *****, practicado a la menor en la causa penal *****, en la que

concluyó que ésta no presentaba síntomas asociados con víctimas de delito *****.

- ✓ Copia certificada de la ampliación del dictamen pericial en psicología de veintisiete de febrero de dos mil trece, que tuvo verificativo ante el Juzgado Décimo Tercero de Procesos Penales Federal en el Distrito Federal, formulado por *****, practicado al servidor público que obra en la causa penal *****, de la que se advierte que manifestó que dista mucho de ser un ***** atendiendo a lo manifestado en su aceptación de valores morales.

Las anteriores documentales públicas, merecen valor probatorio, en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos civiles, anteriormente reproducido, aplicado supletoriamente; pero, sólo acreditan que las declaraciones, dictámenes e informes se emitieron ante el juez del proceso; sin que con ellas se desestimen las conductas atribuidas al servidor público.

- ✓ Confesionales rendidas ante la Contraloría de este Alto Tribunal a cargo de ***** y ***** de las que se advierte que mencionaron: que se instruyó a las maestras ***** y ***** para que permanecieran con sus grupos y que fueran las que atendieran a los menores en sus necesidades de toda índole hasta que se retiraran del referido Centro; que por lo general, los niños siempre rebasaban el horario de las maestras, pero ellas eran responsables de ellos hasta que se retiraran; que la función que realizaba el servidor público era la de acompañante musical; que implementó la política que sólo las maestras podían acompañar a los niños al sanitario, es decir, una asistente educativa o la educadora; que el funcionario tenía prohibido acompañar a los menores al sanitario; que el personal que tenía

el horario hasta el límite del servicio se quedaba con los menores cuando sus padres llegaban a recogerlos más tarde de la hora de salida.

- ✓ Confesional rendida ante la Contraloría de este Alto Tribunal a cargo de *****, de la que se advierte que mencionó, esencialmente, que no conocía a la menor afectada, que no entregó en custodia en el mes de enero de dos mil nueve a la referida menor, al maestro de música, que no recuerda en qué fecha entró a laborar en el Centro de Desarrollo Infantil ya que cubre interinatos.
- ✓ Confesional rendida ante la Contraloría de este Alto Tribunal a cargo de *****, de la que se advierte que mencionó, esencialmente, que la función del servidor público era la de profesor de música; que en diciembre de dos mil ocho aplicó a la menor test psicológico porque los padres refirieron que tenía un cambio de conducta; que no sabe que la menor meses anteriores al día diecinueve de enero de dos mil nueve, observaba la conducta de ansiedad y enojo sin que se haya precisado la causa; que dentro de sus funciones era quedarse con los menores que no fueran recogidos después del horario de salida, sólo si estuviera en guardia y no hubiera otra maestra, o bien, que ya se hubieran ido las maestras de los niños; que no recuerda si en enero de dos mil nueve, el servidor público integró la guardia, que como rutina sí se contemplaba en la guardia, pero no recuerda si en esa fecha lo hizo.

Las anteriores probanzas merecen valor probatorio, al reunir los requisitos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, anteriormente reproducido, aplicado supletoriamente; empero,

no genera convicción para este Alto Tribunal, porque no desvirtúa las conductas atribuidas al servidor público, siendo que sólo hacen alusión a las funciones que desarrollaban las personas de que se trata, así como a las prohibiciones del servidor público, empero, no se encuentren coincidencias de tiempo, modo y lugar respecto a la comisión de las conductas atribuidas al funcionario.

- ✓ Oficio DCP/SCP/2402-AP/12 FOLIO: 8365, de doce de octubre de dos mil doce, suscrito por el Subdirector de Colegios de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, en el que se indica que de la consulta realizada en el sistema del Registro Nacional de Profesiones se obtuvo que ***** y ***** (quienes signaron el informe de la *****, de once de agosto de dos mil nueve), no tienen antecedente como psicóloga y como profesionista, respectivamente.

La anterior documental pública, merece valor probatorio, en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, anteriormente reproducido, aplicado supletoriamente; y acredita la rendición del informe ahí contenido.

En suma, del análisis de los medios probatorios, que fueron ofrecidos por el servidor público y desahogados con el propósito de desvirtuar las conductas que le fueron atribuidas, se advierte que el contenido de las copias certificadas de los dictámenes periciales rendidos por *****, ***** y *****, pudiera favorecer los intereses del servidor público; pero, sólo acreditan que las declaraciones, dictámenes e informes se emitieron ante el juez del proceso, sin que con ellas se desestimen las conductas atribuidas al servidor público.

Lo mismo ocurre con los dictámenes rendidos por ***** y *****; empero, no se toman en cuenta, en razón de que no se adjuntó la batería de las pruebas que se practicaron al funcionario; ni se justificaron las conclusiones de los dictámenes.

En relación con las confesionales a cargo de *****, *****, ***** y *****; de igual forma las declaraciones de los testigos *****, *****, *****, ***** y *****, tampoco se toman en cuenta, porque atendiendo a lo ahí manifestado, no aportan información suficiente, porque no se advierte que por sí mismas hayan presenciado la realización de las conductas atribuidas al servidor público; además, no se encuentran coincidencias de tiempo, modo y lugar respecto a la comisión de las conductas atribuidas.

Por otra parte, cabe precisar que si bien con las diversas documentales que obran en el expediente personal, se acredita que al servidor público no se le ha impuesto sanción alguna por incumplimiento de su deber, empero, este Tribunal Pleno advierte que en las constancias de autos obra copia certificada de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal *****, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la que se declaró penalmente responsable a *****, por la comisión del delito de *****; documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio en términos del artículo 202⁹¹ del Código Federal de

⁹¹ “**Artículo 202.** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, ya que procede de una autoridad jurisdiccional, emitida en ejercicio de sus funciones.

Dicha determinación se apeló y mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal ***** del índice del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, se modificó, para el efecto de que se estableciera el lugar en donde debería compurgar la pena de prisión y no se le diera valor probatorio a lo manifestado por *****, ***** y *****, decisión que se impugnó a través del juicio de amparo directo ***** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que en sesión de uno de octubre de dos mil catorce, negó el amparo a *****.

En ese contexto, en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, emitida en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales y a través de la cual se declaró al referido servidor público como penalmente responsable por la comisión del delito de ***** en perjuicio de la menor afectada, se determinó:

“*****”⁹².

De lo anterior se advierte que se demostraron las conductas que originaron la tramitación de este procedimiento de responsabilidad administrativa consistentes: que en enero de dos mil nueve *****, al estar desempeñando el cargo de ***** en el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprovechándose de la postura de superioridad con

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal”.

⁹² Fojas 210 a 285 del cuaderno 4 de pruebas.

motivo de su cargo, no se condujo con rectitud, ni observó buena conducta y faltó al respeto a la menor afectada *****.

Esto es así, porque si en una sentencia, que constituye cosa juzgada, emitida en un proceso penal, se sancionó penalmente al servidor público por la comisión del delito de ***** respecto de la menor aquí afectada; ello, demuestra que el referido funcionario no cumplió con las obligaciones que como servidor público estaba constreñido a acatar, esto es, las contenidas en el artículo 8, fracción I, en relación con la fracción XXIV, así como la prevista en la fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es decir, no observó buena conducta, ni se condujo con respeto, ni con rectitud, de ahí que la probanza relativa a la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, emitida en la causa penal *****, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, demuestre que las conductas que se imputan al servidor público como constitutivas de causas de responsabilidad se encuentran acreditadas, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en los artículos 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil cinco, y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En efecto, el hecho de que el servidor público haya sido sancionado penalmente por la comisión del delito de *****, demuestra que el referido funcionario no cumplió con las obligaciones que como servidor público estaba constreñido a acatar, motivo por el cual, lo establecido en dicha documental pública constituye una

prueba contundente para determinar que *****, no atendió el deber de actuar con respeto, con rectitud (fracción VI); además, no observó buena conducta, dado que abusó del empleo, al aprovecharse de la postura de superioridad con motivo del cargo que ocupaba (fracción I en relación con la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), ello en perjuicio de la menor afectada.

Por ende, el responsable no solamente estaba constreñido a actuar con respeto, rectitud, observar buena conducta, sin aprovecharse de la superioridad con motivo del cargo que ocupaba, respecto de la menor afectada, como lo está cualquier persona, sino que además, tenía ese deber, al ser servidor público del Estado, puesto que así lo establece expresamente la Carta Magna, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En esa tesitura, cabe anotar que la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, emitida en la causa penal *****, anteriormente relatada lleva al convencimiento de que *****, no cumplió con las obligaciones que como servidor público estaba constreñido a acatar, ya que al haberse desempeñado con el cargo de ***** en el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es responsable, ya que al aprovecharse indebidamente del puesto conferido, no se condujo con buena conducta, ni con rectitud y faltó al respeto a una de sus alumnas, la menor de edad *****, consecuentemente es responsable de la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no cumplió con lo señalado en el numeral 8, fracción I, en relación con las fracciones VI y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, se aprovechó de la confianza o superioridad que tenía sobre la menor de edad, derivada de la relación docente entre alumna y profesor de música, empleó como medio de ejecución de su conducta además de esa postura de superioridad, que estaba bajo su cuidado como maestro del Centro de Desarrollo Infantil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, se acreditó que incurrió en la responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que actuó en contravención a la fracción VI, del numeral 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, puesto que no observó buena conducta, ni se condujo con rectitud, dado que le faltó al respeto a la menor con la que tuvo relación con motivo de su empleo.

Lo anterior se encuentra acreditado, esencialmente, con la fuerza probatoria de la sentencia condenatoria que existe en contra del servidor público, con la que se demuestra plenamente que el referido funcionario no cumplió con las obligaciones que como servidor público estaba constreñido a acatar, además, con la prueba pericial en materia psicológica practicada a ***** por la perito ***** conforme a lo ordenado en la resolución de tres de marzo de dos mil catorce, mediante la cual este Tribunal Pleno ordenó la reposición del procedimiento para que, entre otras cuestiones se desahogara la pericial con el objeto de conocer el estado psicológico y emocional, rasgos de personalidad y posible existencia de alguna psicopatología de cualquier tipo y, en específico, de aquellas de naturaleza ***** del servidor público.

En efecto, los artículos 143, 144, 145 y 211 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme a lo

dispuesto en los artículos 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil cinco y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establecen lo siguiente:

“(...) Artículo 143. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley”.

“Artículo 144. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado. Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título”.

“Artículo 145. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren (sic) unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados”.

“(...) Artículo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal. (...)”.

Los preceptos transcritos establecen, en lo que interesa, lo siguiente:

1. Que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley;

2. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el tema sobre el que deba versar la prueba;

3. Que cada parte debe normar a un perito, a no ser de que se pongan de acuerdo en el nombramiento de uno solo; y

4. Que la prueba pericial será calificada por el Tribunal según la prudente apreciación.

De lo anterior se advierte que es necesario poner especial atención a lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que establece que la prueba pericial será calificada por el Tribunal según prudente apreciación, supuesto normativo que desde luego nos vincula con el sistema o criterio de valoración de la prueba pericial; y, al respecto, conviene tener presente la clasificación que formula la doctrina respecto de los métodos de valoración de las pruebas. Así, se habla de los siguientes métodos:

a) El de la prueba legal consistente en que el legislador establece el valor que se debe dar a cada uno de los medios de prueba; de ahí se hable de pruebas legales que son aquellas en las cuales la ley señala por anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio;

b) El de libre apreciación razonada o sana crítica, que se entiende como aquel sistema que faculta al juzgador para determinar la fuerza probatoria de los medios de prueba; y

c) El sistema mixto que incluye a los dos anteriores.

De la lectura al supuesto normativo correspondiente, se advierte que por lo que hace al procedimiento que nos ocupa la valoración de la prueba pericial debe observar el segundo de los sistemas indicado,

esto es, el de libre apreciación razonada o sana crítica, en virtud de lo establecido en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que prevé que la prueba pericial será calificada por el Tribunal según prudente apreciación.

De igual forma es importante transcribir las siguientes tesis de esta Suprema Corte, emitidas en la Sexta y Séptima Épocas del Semanario Judicial de la Federación, referidas a la valoración de la prueba pericial:

“PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN LIBRE DE LA. Aunque el juzgador goce de libre apreciación de la prueba pericial, de acuerdo con la facultad que al efecto le concede la ley, está obligado a expresar claramente los motivos que determinan cada apreciación, puesto que la facultad de libre valoración en materia probatoria, no implica su arbitrario ejercicio sino que es una facultad discrecional, cuya aplicación tendrá, en todo caso, que justificarse al través del respectivo razonamiento lógico”. (Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Sala, Cuarta Parte, tomo XXI, página 136, número de registro IUS: 272,081).

“AGRARIO. PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación; en consecuencia, si el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el expediente del juicio de garantías y contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio”. (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sala Auxiliar, Volumen 199-204, Séptima Parte, página 328, número de registro IUS: 245,257).

“PRUEBA PERICIAL. CUÁNDO DEBE CALIFICARSE CORRECTO EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA. Si el Juez de Distrito, al examinar la pericial indica prolijamente las razones que tuvo para darle valor, tales como la calidad y conocimiento de los profesores que la emitieron, el que ambos peritos estuvieron acordes en su opinión, que las peritaciones encontraron apoyo en la documental; y, en cuanto a su análisis, expresa el fondo de lo que se trata de probar, los elementos de hecho que se desprenden de las respuestas al cuestionario y la conclusión lógica que se obtiene de dicha exposición, debe concluirse que el a quo analizó y valoró

debidamente la prueba pericial". (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 97, Fuente 217-228, Tercera Parte, número de registro IUS: 237,126).

“PERITOS DESIGNADOS POR EL JUEZ O POR LAS PARTES. VALORACIÓN DE SUS DICTÁMENES. No es jurídicamente posible aceptar que sólo los peritos designados por el Juez de Distrito son dignos de crédito, ya que el artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial debe ser calificada por el juzgador según su prudente estimación, por lo que en uso de tal facultad se puede dar valor probatorio a uno o más de los dictámenes presentados en el juicio, si contienen razonamientos y datos que produzcan convicción sin importar que los peritos hayan sido designados por el Juez o por las partes”. (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 163-168, Tercera Parte, página 83, número de registro IUS: 237,576).

Con base en lo expuesto se puede afirmar que cuando el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, establece que la prueba pericial será calificada por el Tribunal según prudente apreciación, ello significa que el resolutor no está sujeto a un método de valoración legal o tasado, sino que la valoración es libre; sin embargo, ello no significa que esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe el juzgador, es decir, esa valoración libre significa que debe estar sujeta al principio de legalidad, lo que sólo puede lograrse mediante una explicación razonable en la que se contengan las argumentaciones que justifiquen el por qué dicho medio de prueba produce convicción.

En efecto, tratándose de la valoración de una prueba pericial el juzgador al examinar el dictamen respectivo debe exponer las razones que le producen convicción respecto de esa prueba, lo que está vinculado a lo que se denomina como reglas de la sana crítica, es decir, aquellas que se refieren al correcto entendimiento humano y que incluyen una operación lógica, así como se refieren a la experiencia del resolutor, lo que necesariamente implica plasmar en esa

valoración, los conocimientos propios del ejercicio jurisdiccional aplicados al caso concreto que se pretende dilucidar.

Ese ejercicio de razonabilidad que implica la valoración de una prueba pericial según prudente apreciación del juzgador, también exige el apego a los principios generales del derecho y al principio de legalidad que obliga en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia; sólo llevando a cabo el ejercicio que se propone, es cuando podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en un asunto como el que nos ocupa.

Ahora, en párrafos anteriores se expuso que el contenido de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, mediante la cual se condenó al servidor público por la comisión del *****, genera convicción para determinar que el citado funcionario no actuó observando las obligaciones que como servidor estaba constreñido a acatar, es decir, las contenidas en el artículo 8 (fracciones I, VI y XXIV) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por ende, es factible tener por acreditadas las conductas que originaron la tramitación de este procedimiento de responsabilidad administrativa consistentes: que en enero de dos mil nueve *****, al estar desempeñando el cargo de ***** en el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprovechándose de la postura de superioridad con motivo de su cargo, no se condujo con rectitud, ni observó buena conducta y faltó al respeto a la menor afectada *****.

Además, las anteriores conductas se ven corroboradas con lo expuesto en el dictamen elaborado por la perito *****, practicado a *****, y en cuyas conclusiones se estableció que el servidor público presenta psicopatología correspondiente a la presencia de parafilias en específico de ***** acordes a los comportamientos de ***** y que aceptó a nivel inconsciente y preconscious la responsabilidad de los hechos.

En efecto, genera convicción lo expuesto por la perito, porque en el dictamen se realiza la identificación de la persona a estudio, se explica el motivo de estudio, así como la metodología de investigación empleada, se relata la documentación analizada, las consideraciones teórico científicas relacionadas con la sintomatología y trastornos asociados, el *****.

Lo que se adminicula con lo determinado en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que demuestra que el referido funcionario no cumplió con las obligaciones que como servidor público estaba constreñido a acatar y genera convicción para tener por acreditadas las conductas que originaron las infracciones atribuidas al citado servidor público.

Aunado a lo anterior, es preciso resaltar que la opinión de la perito ***** también es coincidente con lo establecido en el dictamen pericial de diez de octubre de dos mil catorce rendido por la perito tercero en discordia *****, quien en las conclusiones comparte la lógica que de la evaluación realizada al servidor público, comparando sus características de personalidad con las que presenta comúnmente

*****, se observa que el evaluado presenta algunas características de personalidad que son compatibles con las de *****.

Sin que se soslaye la aclaración realizada por la perito en el sentido de que lo anterior, no significa que haya dado paso al acto delictivo ya que para eso se requieren los factores crimino-impelentes que al momento de la evaluación y con los resultados obtenidos, no se observaron en el evaluado; ello, en razón que lo relevante es que tanto ***** , como ***** , coincidieron en que el servidor público presenta características de personalidad acordes a los comportamientos de ***** .

Por otra parte, cabe precisar que lo razonado en el dictamen pericial de siete de agosto de dos mil catorce, rendido por ***** , practicado a ***** , en términos de lo establecido en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, anteriormente transcrito, aplicado supletoriamente, no genera convicción para este Alto Tribunal, en virtud de que si bien en el dictamen se hace alusión a las pruebas psicológicas y psicométricas (Test de matrices progresivas para la medida de la capacitación intelectual, subescala de ordenamientos de dibujos de WAIS, entre otras); lo cierto es que no se adjuntó la batería de las pruebas que se practicaron al funcionario, para justificar las conclusiones del dictamen, motivo por el cual carece de valor probatorio.

Por tanto, la anterior relación de los elementos probatorios, permite concluir que, como se señaló, las conductas en que se sustentan las causas de responsabilidad que se imputan al servidor público ***** están plenamente acreditadas en autos.

En efecto, respecto de la conducta del servidor público consistente en haber abusado indebidamente de su puesto, es decir,

aprovechándose de su postura de superioridad, faltó *****; además, no observó buena conducta, ni se condujo con rectitud respecto *****.

En consecuencia, ***** incurrió en la causa de responsabilidad establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por incumplimiento a la obligación que le impone el artículo 8, fracción I, en relación con la fracción XXIV, así como el deber previsto en la fracción VI, de ese numeral de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De ahí que, está plenamente demostrado así la existencia de las infracciones atribuidas a *****; así como que las conductas encuadran en los supuestos legales establecidos como constitutivos de responsabilidad administrativa, por lo que se precisa que es plenamente responsable administrativamente, en virtud de que es un servidor público que, como tal, está obligado a observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen su actuación, conforme a los artículos 109, fracción III, y 113 constitucionales, encontrándose sujeto a las consecuencias que su desacato implica; advirtiéndose que los servidores públicos infractores referidos no se colocan en ninguna situación que pudiera considerarse eximente o excluyente de su responsabilidad.

También es importante precisar que no se desconoce que una de las probanzas que fue fundamental para la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual consistió en el informe de la ***** (*****), de once de agosto de dos mil once, suscrito por la psicóloga *****, Directora y apoderada de dicha asociación y psicóloga *****, Coordinadora psicóloga del Área Infantil.

Sin embargo, dicha documental de carácter privado, si bien contiene la declaración de *****, lo cierto es que en el expediente de responsabilidad corre agregada la documental pública consistente en el oficio DCP/SCP/2402-AP/12 FOLIO: 8365, de doce de octubre de dos mil doce, firmado por el Subdirector de Colegios de Profesionistas, Dirección de Colegios de Profesionistas, Dirección General de Profesiones, Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, en el que se indica que esas personas no tienen antecedentes la primera, como psicóloga y la segunda de ellas como profesionista, lo que se corroboró de la consulta de la página web <http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula>.

Cabe a aclarar que dicha documental pública se tuvo por agregada en autos para los efectos pertinentes, en virtud de que cuando el servidor público ***** la ofreció como prueba, no suscribió el escrito respectivo; y cuando pretendió anunciarla como prueba superveniente, el Contralor de este Alto Tribunal por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil doce, determinó que no existía esa situación de supervenencia.

Lo descrito evidencia que la documental privada consistente en el informe de la *****, (*****), de once de agosto de dos mil nueve, existe evidencia de que las personas que lo suscribieron no tienen registrada profesión alguna en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de ahí que tal probanza no se pueda tomar en cuenta para resolver el asunto que nos ocupa.

Una vez que quedaron plenamente acreditadas las conductas atribuidas al servidor público, así como la plena responsabilidad en la comisión, se procede a sintetizar los argumentos expuestos por

*****, a través de los cuales pretende desvirtuar la comisión de las infracciones atribuidas, a saber:

➤ **Escrito de diez de septiembre de dos mil nueve.**

1. Indica que hasta que se le notificó de este procedimiento se dio cuenta de que estaba vigilado, ya que las maestras permanecían en el grupo en todo momento; agrega, que ello ha ocurrido desde que ingresó a laborar como maestro de cantos y para acreditar lo anterior exhibió una fotografía; añade que se le comisionó al área de programas sociales hasta el día de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad; indica que sólo se trata de conductas tendientes a afectar al denunciado, causándole daños y perjuicios psicológicos, emocionales, trastornos familiares y daños patrimoniales; aunado a la agresión laboral que sufre, dado que las personas lo ven con recelo y hacen comentarios desagradables originados por las imputaciones infundadas.

2. Que el veintiséis de agosto de dos mil nueve recibió citatorio relativo a la averiguación previa FDS/FDS-6/T1/564/09-08, respecto del delito de *****; por lo que se presentó ante el representante social y se reservó el derecho para exhibir declaración por escrito; agrega que se percató de la existencia del dictamen pericial emitido por ***** de catorce de junio de dos mil nueve, practicado a la menor *****; en el que se concluyó que ésta no presenta sintomatología como consecuencia de *****; dictamen que es imparcial y deja sin efectos el informe de la *****; añade que lo anterior se corrobora con los estudios practicados por el médico legista y pediatra, respecto al estado físico de la menor, de los que se advierte que la encontraron íntegra.

3. Que es imparcial dicho proveído, ya que la *****, se conduce con parcialidad, en virtud de que señaló que la madre de la menor efectuó su servicio social en tal asociación, lo que implica la existencia de una relación de amistad forjada durante el tiempo en que convivió con las personas que ahí laboran; por tanto, los estudios que se debieron elaborar tendrían que haberse formulado por personas no involucradas emocionalmente con la víctima; añade que objeta los estudios elaborados por la referida persona moral, en cuanto a su alcance y valor probatorio, dado que las conclusiones constituyen meras presunciones sin sustento, las cuales están viciadas al ser elaborados por personas parciales.

4. En el apartado de alegatos manifestó que las conductas no le constan al Director General de Desarrollo Humano y Acción Social, dado que en todo momento se refiere en tercera persona, aunado a que no acreditó ser representante de *****, supuesta madre de la menor afectada, quien debió haber comparecido en ejercicio de la patria potestad; por lo que opone las excepciones de falta de personalidad.

5. Añade que al no existir responsabilidad alguna, solicita la restitución en sus derechos y prestaciones, así como la cancelación de algún registro relacionado con el procedimiento de responsabilidad; aunado a que el servidor público ha sido maestro de música por más de veinte años y ha trabajado con menores adscritos a diferentes Centros de Desarrollo Infantil (Centro de Desarrollo Infantil de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de este Alto Tribunal) y jamás ha tenido problemas de esta naturaleza, máxime que fue sometido a pruebas psicológicas al momento en que fue seleccionado para laborar en esos centros de trabajo.

➤ **Escrito de diez de julio de dos mil diez.**

6. Que el denunciado nunca acompañó a ningún niño al baño, dado que esa no era su función, ni tampoco se quedó solo con el grupo, dado que siempre estaba la educadora o asistente educativo, por lo que tal asistente (*****), sabe y le consta que durante la clase de cantos y juegos deben estar presentes tanto el maestro titular, como el asistente.

7. Añade que lo manifestado por la menor durante el desarrollo del taller “Juguemos a cuidar nuestro cuerpo” impartido en el Centro de Desarrollo Infantil y lo asentado en el informe rendido por la asociación multicitada, difiere con lo aducido por la menor en el informe psicológico signado por ***** (directora y apoderada de esa asociación) y por ***** (psicóloga tratante de esa asociación), al proyectarse el video “El árbol de Chicoca”.

8. Señala que en la diligencia de veintinueve de junio de dos mil nueve, la menor manifestó que ***** es la persona que pasó con el servidor público, lo cual no puede ser posible, ya que de autos se advierte que tal persona entró a laborar del diecinueve de mayo al cinco de junio de dos mil nueve, lo que se acreditó con el oficio 333/2010 de la Directora del *****, a través del cual informa el nombre completo de ***** e indica que auxilió en actividades en la fecha mencionada; por lo que cobra relevancia el dictamen pericial psicológico practicado a la menor, por ***** de catorce de julio de dos mil nueve, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que se estableció:

“*****”.

9. En diverso argumento, aduce el servidor público que lo manifestado por el niño ***** en la actividad de la familia efectuado por la *****, manifestó: *****; empero, tal afirmación es falsa, porque en la escuela no hay rejas, tal y como consta en autos.

10. En diversos planteamientos expuestos en distintos escritos, adujo ***** que en términos del artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se debe declarar la **caducidad de la instancia**, apoya tal argumento en las siguientes tesis: la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en junio de dos mil uno, de rubro: “**CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN LOS JUICIOS CIVILES. CORRESPONDE A LAS PARTES IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).**”; con registro 188674; así como la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en junio de mil novecientos noventa y uno, de rubro: “**CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE REVISIÓN, PROCEDENCIA DE LA, EN MATERIA CIVIL O ADMINISTRATIVA.**”; registro 222450.

➤ **Escrito de quince de octubre de dos mil doce.**

11. Refiere que al realizar una consulta a la Dirección General de Profesiones para saber si ***** y ***** tienen título profesional ahí registrado, del oficio DCP/SCP/2402-AP/12, folio 8385, de doce de octubre de dos mil doce, signado por el Subdirector de Colegios de Profesionistas que al realizar una consulta al Sistema del Registro Nacional de Profesiones no existe ningún antecedente de esas personas, las cuales son las que firmaron el informe de once de agosto de dos mil nueve, respecto a los resultados obtenidos del taller “Juguemos a cuidar nuestro cuerpo” impartido por la *****, en el que se ostentaron como profesionistas en psicología.

Que por esa razón no deben ser valoradas las simples opiniones ciudadanas, con las cuales no se acredita tener la patente para el ejercicio de la profesión de psicóloga; por lo que de aceptarse no se estaría dando un debido proceso al presunto responsable, consecuentemente, deben anularse esas manifestaciones expuestas por quienes no cuentan con cédula profesional; aunado a que es criterio de este Alto Tribunal que los peritos deben acreditar tener conocimientos; de ahí que deba anularse toda manifestación que hayan hecho, al constituir pruebas ilícitas, ya que no reúnen las características y condiciones indicadas en la jurisprudencia

1a. /J. 139/2011 (9a), de rubro: **“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES”**; con número de registro 160509.

Expuesto lo anterior, por razón de método y estudio preferente se abordará el estudio del argumento identificado con el número 10, a través del cual ***** pretender desvirtuar las infracciones atribuidas y hace valer la caducidad.

En efecto, en ese argumento, reiterado en diversos planteamientos expuestos en distintos escritos, adujo ***** que en términos del artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se debe declarar la caducidad de la instancia, apoya tal argumento en las siguientes tesis: la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en junio de dos mil uno, de rubro: **“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN LOS JUICIOS CIVILES. CORRESPONDE A LAS PARTES IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).”**; con registro 188674; así como la emitida por el Segundo Tribunal

Colegiado del Sexto Circuito, en junio de mil novecientos noventa y uno, de rubro: “**CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DE REVISIÓN, PROCEDENCIA DE LA, EN MATERIA CIVIL O ADMINISTRATIVA.**”; registro 222450.

El anterior planteamiento es infundado.

Esto es así, porque del análisis del numeral 21, fracción III⁹³ de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se infiere que el hecho de que la autoridad administrativa no emita la resolución sancionatoria dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, no es motivo para que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se extinga por caducidad de las facultades de aquélla, puesto que para ello es necesario que dicho supuesto se hubiera previsto expresamente en el cuerpo legal en cita, lo cual no sucede, ya que, la citada normatividad no estableció una consecuencia legal para el caso de que la autoridad no emita tal resolución en ese plazo.

Lo anterior obedece a que el procedimiento de responsabilidad administrativa es de pronunciamiento forzoso, ya que su materia la constituye una conducta respecto de la cual existe interés general en que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones de los servidores públicos, tal y como se estableció por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 206/2004, que se invoca por analogía, de rubro y texto siguientes:

⁹³ “**Artículo 21.** La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

(...) III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades; (...).”

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002. El procedimiento de responsabilidad administrativa, en cuanto tutela los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público, es de pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye una conducta respecto de la cual existe el interés general en que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público. Por tanto, la omisión de la autoridad sancionadora de dictar resolución dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, previsto en el artículo 64, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no produce la caducidad de la facultad para emitir aquella, por no preverlo así alguna disposición y porque el único límite a la potestad sancionadora administrativa del Estado es la prescripción contenida en el artículo 78 de la ley mencionada, sin que lo anterior signifique que la autoridad tenga la facultad arbitraria de alargar indefinidamente su actuación, pues el plazo de prescripción reinicia a partir de que se notifica al servidor público la incoación del procedimiento disciplinario relativo”. (Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 579, tomo XXI, de enero de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro IUS: 179466).

En la ejecutoria que originó el anterior criterio, se estableció que el procedimiento de responsabilidad administrativa busca asegurar la óptima prestación del servicio público, de tal manera que éste corresponda a los intereses de la colectividad, pudiendo concluir sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo la sanción administrativa correspondiente, determinando con exactitud si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, lo que explica que el legislador no haya fijado consecuencia o sanción alguna para los casos en que no se respete el plazo para el dictado de la resolución, ya que es clara la necesidad de

que ese tipo de procedimientos se resuelvan obligatoriamente con la emisión de la resolución que ponga fin a los mismos.

Además, tal y como se estableció en la ejecutoria que originó la jurisprudencia transcrita, para el Estado es importante definir la situación jurídica de aquellos servidores públicos a los que se les sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que a través de éstos se pretende salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el ejercicio del servicio público, lo que implica que por razones de orden público e interés social se requiere que esos procedimientos se resuelvan con la emisión de una resolución, lo que explica que en la norma no prevea consecuencia alguna en los casos en que no se respete el plazo referido; máxime que el plazo de cuarenta y cinco días es de aquellos términos ideales que fija el legislador para la realización de determinada conducta, sin embargo, la complejidad que en un momento dado tenga cada uno de los procedimientos de responsabilidad administrativa se traduce en que no se pueda señalar alguna consecuencia por no respetar esos plazos, pues se reitera, por razones de orden público e interés social no se puede prever consecuencia o sanción alguna como las que pretende el quejoso, porque ello implicaría que no se defina la situación jurídica del servidor público, cuando por razones de seguridad jurídica tanto para él, como para la sociedad es importante definir esa situación.

Cabe agregar que si bien en la jurisprudencia 2a./J. 206/2004 se analizó una disposición de una denominación diversa y vigente en el ámbito federal hasta el trece de marzo de dos mil dos; lo cierto es que del estudio comparado de lo dispuesto en el artículo 64, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que en esencia

prevén el mismo supuesto, ya que establecen que desahogadas las pruebas en el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad resolverá en los plazos mencionados en cada disposición es decir treinta días hábiles o cuarenta y cinco días hábiles, respectivamente, sin señalar consecuencia alguna cuando la autoridad resuelva fuera de esos plazos.

Igualmente, se debe precisar que mediante ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 85/2006, la Segunda Sala analizó el supuesto previsto en el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y determinó que el hecho de que la autoridad administrativa no emita la resolución correspondiente dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles o, en su caso, al concluir la ampliación de éste, no es motivo para que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se extinga por caducidad de las facultades de aquélla, pues para ello es necesario que dicho supuesto se hubiera previsto expresamente en el artículo 34⁹⁴, de la Ley en cita; además de que admitir que la mencionada omisión constituye una causa eficiente de extinción de facultades, sería tanto como considerar que el poder sancionador del Estado se ejerce discrecionalmente, quedando sujeto a la voluntad de quienes tienen la facultad de imponer las sanciones.⁹⁵

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 85/2006, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

⁹⁴ **Artículo 34.** Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción".

⁹⁵ En similares términos resolvió la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el amparo directo en revisión *****, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil seis.

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA O EL DE AMPLIACIÓN QUE SEÑALA EL PROPIO PRECEPTO. De la interpretación del numeral citado se concluye que el hecho de que la autoridad administrativa no emita la resolución sancionatoria dentro del plazo de 45 días hábiles o, en su caso, al concluir la ampliación de éste, no es motivo para que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se extinga por caducidad de las facultades de aquélla, pues para ello es necesario que dicho supuesto se hubiera previsto expresamente en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo cual no sucede. Además, la omisión de dictar el acto sancionatorio no agota la competencia del órgano administrativo, pues se trata de una facultad que ejerce el titular de éste, que en todo caso puede ser causa de responsabilidad, según lo previene la fracción XXIV y último párrafo del artículo 8o., en relación con el artículo 17 de la Ley citada; admitir lo contrario, esto es, que la mencionada omisión constituye una causa eficiente de extinción de facultades, sería tanto como considerar que el poder sancionador del Estado se ejerce discrecionalmente, quedando sujeto a la voluntad de quienes tienen la facultad de imponer las sanciones”. (Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página: 396, tomo XXIV, de julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro IUS: 174609).

Ahora, trasladando las anteriores consideraciones a este asunto, se tiene que por razones de seguridad jurídica es importante definir la situación jurídica de los servidores públicos sujetos a ese tipo de procedimientos, esto es, que tramitado un procedimiento de responsabilidad administrativa es necesario que mediante una resolución se defina o se califique su conducta como tal, ya que de no ser responsable de las conductas que se le atribuyen, ello constará expresamente en la resolución que se emita en tal procedimiento, lo que resulta de suma importancia para concluir que por razones de seguridad jurídica y en beneficio del propio servidor público es necesario que la autoridad emita la resolución en el procedimiento

administrativo, aún fuera del plazo de cuarenta y cinco días; de ahí que si en el artículo 61, fracción III de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se prevé una consecuencia como resultado de no dictar la resolución que corresponda en el plazo referido en la Ley, ello no implica que opera la caducidad como lo aduce el servidor público; por tanto, es infundado ese argumento.

Por otra parte, en relación con los argumentos sintetizados con el 1, en los que se adujo, esencialmente, que hasta que se le notificó este procedimiento se percató de que estaba siendo vigilado, dado que las maestras permanecían en el grupo en todo momento, lo que ha ocurrido desde que ingresó a laborar como maestro de cantos y para acreditarlo exhibió una fotografía y, que sólo se trataba de conductas tendientes a afectarlo, causándole daños psicológicos y trastornos familiares, así como agresiones laborales.

Los anteriores argumentos son inatendibles, en virtud de que esas alegaciones son observaciones generales que no desvirtúan el contenido de las probanzas (pericial en materia de psicología practicada a *****, por la perito *****, en este procedimiento y la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales), que obran en autos; ni eximen al servidor público de la responsabilidad que se le imputa, dado que lo único que evidencian es que realizaba funciones de profesor de música en el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de este Alto Tribunal, lo que implica que conoció a la menor afectada; además, por lo que respecta a la fotografía que refiere, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, carece de valor probatorio

para desvirtuar la imputación que hay en contra del servidor público, dado que únicamente demuestra que fue tomada en cierta época y lugar.

En relación con los argumentos sintetizados con el número 2, los que giran en torno a la conclusión contenida en la copia certificada del dictamen pericial de ***** de catorce de junio de dos mil nueve, practicado a la menor afectada, el cual se encuentra agregado en la averiguación previa FDS/FDS-6/T1/564/09-08, radicada en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Unidad Investigadora número FDS-4-04, primer turno, de la Fiscalía de Investigación para *****; cabe precisar que, como anteriormente se mencionó, esa probanza carece de valor probatorio en términos de lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, motivo por el cual es insuficiente para desvirtuar las conductas atribuidas al servidor público.

Lo anterior es así, porque en esa documental, la perito se limita a realizar un análisis genérico respecto a las causas de las conductas, sin que tenga una base razonadamente aceptable, en la que se tomen en cuenta los conocimientos técnicos científicos que por su área del conocimiento le exigen o que por su experiencia le dicte; ello, en virtud de que tampoco se motivan, ni justifican las conclusiones, dado que se omite expresar las reglas técnicas o científicas aplicadas para sustentar el resultado técnico de esa valoración psicológica, por lo que, no aporta elementos de convicción que justifiquen los conocimientos especiales que resultan necesarios para que la autoridad resuelva las conductas materia de análisis; consecuentemente, los resultados de la pericial de mérito, que obra en copia certificada, resultan insuficientes para desvirtuar las conductas atribuidas al servidor público.

En relación con los argumentos sintetizados en los numerales 3 y 11, mediante los cuales se objeta el informe emitido por la *****, cabe precisar que dicho informe no se toma en cuenta para resolver el asunto que nos ocupa, motivo por el cual resulta ocioso establecer si existió parcialidad en su emisión debido a que la madre de la menor afectada prestó su servicio social en la multicitada asociación.

Por otra parte, es infundado el argumento sintetizado con el número 4 en el que se aduce que el Director de Desarrollo Humano y Acción Social de este Alto Tribunal no estaba legitimado para presentar la denuncia, ya que no acreditó contar con la representación de la madre de la menor.

Esto es así, porque en el caso no se toma en cuenta que el citado funcionario público realizó un informe dirigido a la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual puso en conocimiento de ésta la realización de diversas conductas que podían implicar la comisión de una infracción administrativa, lo que efectuó en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, como una de las obligaciones que tiene como servidor público; por tanto, al haber comparecido con ese carácter cuenta con legitimación para efectuar el informe de hechos; de ahí, que tampoco fuera necesario que acreditara la representación de la madre de la menor, puesto que lo signó como funcionario público que tiene conocimiento de actos que pudieran generar la comisión de una infracción.

Por otra parte y en relación con los planteamientos sintetizados con el numeral 5, cabe precisar que la circunstancia de que el ahora responsable no haya tenido problemas conductuales con anterioridad,

no lo exime de la responsabilidad que en ese asunto se comprueba, dado que ello obedece a las pruebas que obran en autos, específicamente, a la pericial en materia de psicología practicada a *****, por la perito *****, en este procedimiento y a lo determinado en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales.

Igualmente, cabe precisar que respecto a lo aducido en los argumentos resumidos con los numerales 6, 7, 8, y 9, mediante los cuales pretende desvirtuar las infracciones acreditadas en este asunto, como quedó referido en párrafos que anteceden, las conductas perpetradas por el responsable están demostradas, específicamente, con la pericial en materia de psicología practicada a *****, por la perito *****, en este procedimiento y con lo determinado en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la causa penal ***** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales; sin que obste para arribar a la anterior conclusión, lo aducido por el servidor público en el sentido de que nunca acompañó a ningún niño al baño, dado que esa afirmación está desvirtuada con las referidas probanzas.

Además, cabe acotar que no lo exime de responsabilidad el hecho de que existan discrepancias en las declaraciones de la menor, como del niño *****, puesto que de las pruebas (específicamente de la pericial de ***** en este procedimiento y lo determinado en la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece) que se valoran en este asunto, arrojan la convicción de que el servidor público incurrió en las infracciones que se le imputaron, de ahí lo infundado de los argumentos en estudio.

También se indica que respecto a las objeciones efectuadas en contra de diversos documentos que obran en la causa penal ***** (especialmente, la sentencia de veinte de diciembre de dos mil trece, dictada en la referida causa penal), se precisa que tales medios merecen valor probatorio, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, dada la naturaleza de documental pública, que al adminicularse con la pericial en materia de psicología practicada a *****, por la perito *****, en este procedimiento, que obran en autos, son eficaces para demostrar que *****, no cumplió con las obligaciones a las que estaba obligado como servidor público y que le fueron atribuidas.

Por tanto, contrariamente a lo aducido por el servidor público, está plenamente demostrada la existencia de las conductas que se imputan a *****, consistentes en la causa de responsabilidad establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por incumplimiento a la obligación que le impone el artículo 8, fracción I, en relación con la fracción XXIV, así como el deber previsto en la fracción VI, de ese numeral de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

QUINTO. Sanción.

Ahora, partiendo de que han quedado plenamente demostradas las infracciones imputadas por la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la plena participación reprochable a *****, se procede a determinar la sanción que debe imponerse al servidor público antes referido.

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:

“Artículo 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Título y en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en:

- I. Apercibimiento privado o público;**
- II. Amonestación privada o pública;**
- III. Sanción económica;**
- IV. Suspensión;**
- V. Destitución del puesto, y**
- VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.**

Ahora, para efectos de determinar las sanciones que deben imponerse a *****, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 136 de la misma Ley, que establece:

“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las fracciones XI, XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

El artículo 53, en sus tres últimos párrafos y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los que remite el primer párrafo del numeral transcrito para la valoración de las faltas y la aplicación de la sanción conducente, corresponden a los numerales 13, párrafos octavo, penúltimo y último, así como 14 de la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, a los que debe atenderse conforme a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de esta última Ley, el primero de ellos, en cuanto a los párrafos que regulan la inhabilitación como sanción y el segundo, al establecer los elementos que deberán valorarse para la imposición de las sanciones. En el caso, resulta relevante lo dispuesto en los numerales mencionados de la citada Ley, que establecen:

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado”. (Lo subrayado no es de origen).

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal”.

Se procede así a ponderar los diversos elementos a que alude el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En cuanto al primer elemento al que alude el dispositivo señalado, es decir la gravedad de las infracciones, debe destacarse que el servidor público a que se refiere el procedimiento administrativo en el que se dicta esta resolución, sí incurrió en faltas catalogadas como graves, puesto que a pesar de que las fracciones I, VI y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se contemplan infracciones que deban considerarse “en todo caso” como graves, en términos de los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13 de la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se estima que en este asunto, atendiendo a las circunstancias particulares que describen las conductas mediante las

cuales se incurrió en el incumplimiento de dichos deberes, se actualiza una infracción administrativa de la mayor gravedad.

Es decir, las conductas atribuidas al servidor público (consistentes: en que aprovechándose de la postura de superioridad con motivo de su cargo, no se condujo con buena conducta, ni rectitud y faltó al respeto a la menor afectada, previstas en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), constituyen faltas de carácter grave, puesto que sabiendo la trascendencia de su actuar al ser técnico en previsión social y trabajar con menores, por lo menos desde octubre de dos mil tres (como se advierte de la constancia de antigüedad que obra a foja ochenta y dos del tomo uno de pruebas); como por el desprestigio que con su actuar causa a esta Suprema Corte de Justicia en la que, como Máximo Tribunal, debe dar ejemplo en el servicio que se desempeña, es decir, conducirse con respeto, rectitud y buena conducta, observar las disposiciones legales conducentes), lo que lleva a exigir la excelencia en sus funcionarios públicos; y a no permitir este tipo de actuaciones, castigando con severidad a quienes incurran en prácticas que contradigan esta virtud a fin de que se supriman y pueda desempeñar la función debidamente.

En relación con las circunstancias socioeconómicas del servidor público, debe señalarse que de autos, concretamente de su expediente personal que en copias certificadas obra como tomo de pruebas uno, se derivan los datos relativos a los puestos que ha desempeñado en el Centro de Desarrollo Infantil de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo menos desde el uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, como se advierte de la hoja única de

servicios⁹⁶; y en este Alto Tribunal desde que ingresó como educador interino, adscrito al Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” a partir del uno de octubre de dos mil tres, para llegar al puesto que desempeña de ***** a partir del uno de febrero de dos mil cinco, cargo en el que, conforme a la última constancia de percepciones⁹⁷ y que es de cinco de marzo de dos mil nueve, da lugar a un sueldo de ***** (*****), a una compensación de ***** (*****), y a prestaciones por el importe de ***** (*****), lo que arroja un total de ***** (*****).

En su cédula de datos biográficos sólo se advierte que es casado; y obra a fojas sesenta y dos del mismo expediente personal un estado de cuenta del trabajador del sistema de ahorro para el retiro expedido por la institución bancaria *****, correspondiente a dos mil doce, en el que consta que en la subcuenta de retiro tenía un saldo de ***** (*****), y en la subcuenta de vivienda ***** (*****), lo que arroja un total de ***** (*****).

En cuanto al nivel jerárquico del servidor y sus antecedentes, como se ha señalado, ingresó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de octubre de dos mil tres, siempre adscrito al Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional”, habiendo tenido una carrera ascendente, pues ocupó el puesto de *****, a partir del *****, sin que obre en su expediente reporte alguno por fallas en el desarrollo de su trabajo o que se le hubiere impuesto sanción alguna por incumplimiento a sus deberes.

En la hoja de control de la plaza que ocupa el servidor público, que obra a foja cuarenta y siete de su expediente personal, que contiene la rúbrica de visto bueno del titular del área, aparecen en la

⁹⁶ Foja 34 del tomo de pruebas 1.

⁹⁷ Foja 15 del tomo de pruebas 1.

parte final las calificaciones asignadas al servidor público en once rubros, en los que se le asignó la siguiente calificación, a saber: memoria 3, iniciativa 4, toma de decisión 3, habilidad de análisis 4, habilidad numérica 3, habilidad administrativa 3, habilidad de influencia 4, liderazgo 4, creatividad 5, dinamismo 4 y tensión 4, en una escala del uno a cinco.

Asimismo, consta que asistió a los siguientes cursos: “Protección Civil”, “Curso Integral en Protección Civil”, “Manejo de Estrés”, “Segunda Jornada del Buen Trato”, “Asertividad”, “Cantos y Juegos”, “Desarrollo Humano”, “Animación a la lectura Infantil”, “Toma de decisiones”, “Ecología en Preescolar”, “Hacia una práctica educativa de calidad en los CENDI”, “Preparación psicológica para situaciones de emergencia”, “Formación de Brigadas”, “Primeros auxilios”, “Educación física para preescolares”, “Taller de expresión creativa y comunicación corporal”, “Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica”, “Taller de habilidades en comunicación no violenta”, “Taller de investigación-creación en música e interdisciplina”, “Taller intensivo de investigación-creación en música e interdisciplina” y, “Curso interactivo del clic 3.0”.

En cuanto a las condiciones exteriores y medios de ejecución, se advierte que, como con anterioridad se señaló, las conductas consistentes en que el servidor público aprovechándose de la postura de superioridad con motivo de su cargo, no se condujo con respeto, rectitud, buena conducta, ni observó las disposiciones legales conducentes, respecto a la menor afectada.

Respecto a la reincidencia en la comisión de las conductas constitutivas de responsabilidad, no existe en el expediente personal de ***** constancia de que con anterioridad haya sido sancionado por falta alguna en el desempeño de su trabajo.

Por otra parte, cabe mencionar que con las conductas del servidor que dieron lugar a las causas de responsabilidad no obtuvo beneficio o lucro alguno, ni se causó daño a este Alto Tribunal.

Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar la sanción que debe imponerse al servidor público atendiendo al análisis concreto de los elementos referidos.

Con base en lo expuesto, atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que la infracción cometida por ***** resulta grave, en virtud de que desempeñando el cargo de técnico en previsión social en el Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123 Constitucional” de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprovechó de la postura de superioridad de ese nombramiento, inobservando buena conducta y faltó al respeto a una menor de edad, conducta por la que se le sancionó penalmente por el delito de *****, este Tribunal Pleno concluye que debe considerarse a ***** como de una **reprochabilidad máxima**; por lo que en justa y legal aplicación del artículo 13, fracción V, tercer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se le impone como sanción, la **inhabilitación por veinte años** para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Se subraya que, en cuanto a la **inhabilitación** que el propio artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, deja a juicio de quien resuelve, este Tribunal Pleno considera que la **inhabilitación por veinte años** impuesta a ***** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, obedece a que las conductas por él desplegadas se clasificaron como graves, dado que, como ya se precisó, atendiendo a

que en el caso, se trata de una menor que a la fecha en que se cometieron las conductas, contaba sólo con cuatro años, nueve meses de edad, lo que indica que las conductas son perniciosas; aunado a que también deben tenerse en cuenta las consecuencias que las conductas producen en el servicio público a nivel institucional, porque este tipo de conductas generan desconfianza, inseguridad y falta de credibilidad en las personas beneficiarias del servicio público de que se trata y, en el caso concreto, la desconfianza de los padres de dejar a sus hijos en un ***** , por el miedo de que puedan ser objeto de ***** , y que las personas responsables no sean fuertemente sancionadas, generándose un ambiente de impunidad.

También, cabe precisar que no ha lugar a destituir al servidor público, conforme lo prevé el cuarto párrafo del mismo precepto, puesto que mediante ejecutoria de uno de octubre de dos mil catorce, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo ***** , confirmó la pena de destitución impuesta en la sentencia ahí reclamada, como se advierte de la siguiente transcripción:

“(...) Además fue acertado que la responsable con fundamento en el dispositivo 266 bis fracción III del Código Penal Federal, además de la pena de prisión impuesta destituyera al quejoso del cargo público que venía desempeñando de *** adscrito al Centro de Desarrollo Infantil ‘Artículo 123 Constitucional’, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (...).”**

No impide sancionar a ***** en los términos arriba anotados, la circunstancia de que por los mismos hechos se le haya condenado, por su responsabilidad en la comisión del delito de ***** , en la causa penal ***** , ante el Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; ya que los procedimientos como el presente, se instruyen para fincar exclusivamente la

responsabilidad administrativa de los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; por lo que se desarrollan de manera autónoma a los procesos penales que también puedan derivarse de los mismos hechos, atendiendo a lo establecido en el artículo 109 constitucional, que dispone:

“Artículo. 109. (...).

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza (...).”

En ese sentido, como los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tienen la finalidad de que aquéllos que sean indignos del cargo, sean separados de él (mediante suspensión o destitución), así como inhabilitarlos por determinado lapso para que puedan ocupar otro cargo público, además de resarcir el perjuicio económico causado, es indudable que tienen diversa naturaleza del procedimiento que se instaura de acuerdo a la legislación penal, si los mismos hechos por los que se les encuentran responsables constituyen delitos.

Finalmente, deberá remitirse copia de la presente resolución a la Dirección General de Personal y a la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que realicen las anotaciones correspondientes en el registro de servidores públicos sancionados; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; a la

Dirección General de Personal del Consejo de la Judicatura Federal; a la Contraloría Interna y a la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a los respectivos órganos internos de control de las Cámaras de Diputados y de Senadores; y, asimismo, a la Secretaría de la Función Pública, para los efectos legales correspondientes.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. ***** incurrió en las causas de responsabilidad administrativa establecidas en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones previstas en el artículo 8, fracción I, en relación con las XXIV y VI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción consistente en inhabilitación por veinte años para ejercer empleos, cargos o comisiones por servicio público.

TERCERO. Con copia autorizada de esta resolución gírese oficio a la Dirección General de Personal y a la Contraloría de esta Suprema Corte; a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; a la Dirección General de Personal del Consejo de la Judicatura Federal; a la Contraloría Interna y a la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a los respectivos órganos internos de control de las Cámaras de Diputados y de Senadores; y, asimismo, a la Secretaría de la Función Pública, para los efectos legales correspondientes.

Notifíquese; personalmente esta determinación al servidor público sancionado, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales hizo la declaratoria correspondiente.

Durante la discusión y votación de este asunto no estuvo presente el señor Ministro Pardo Rebolledo.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MINISTRO PRESIDENTE:

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

MINISTRO PONENTE:

ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA.

Esta hoja corresponde a la responsabilidad administrativa 64/2009. Servidor público: *****. Fallada el quince de febrero de dos mil dieciséis, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** ***** incurrió en las causas de responsabilidad administrativa establecidas en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones previstas en el artículo 8, fracción I, en relación con las XXIV y VI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **SEGUNDO.** Se impone a ***** la sanción consistente en inhabilitación por veinte años para ejercer empleos, cargos o comisiones por servicio público. **TERCERO.** Con copia autorizada de esta resolución gírese oficio a la Dirección General de Personal y a la Contraloría de esta Suprema Corte; a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; a la Dirección General de Personal del Consejo de la Judicatura Federal; a la Contraloría Interna y a la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a los respectivos órganos internos de control de las Cámaras de Diputados y de Senadores; y, asimismo, a la Secretaría de la Función Pública, para los efectos legales correspondientes”. **Conste.**

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.